

Julio 14 de 1938

22ª REUNION — 13ª SESION ORDINARIA

Presidencia del señor Juan G. Kaiser, ingeniero Juan F. Morrogh Bernard
y doctor Juan Vilgré La Madrid

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguar, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Aisina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperín, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Astesiano, Carmelo I.
Barceló, Alberto
Barrau, José
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Biancofiore, Rafael
Boatti, Ernesto C.
Busignani, Mario
Cabral, Humberto
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Castro Frediani, Manuel L.
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courrel, Carlos D.
Damonte Taborda, Raúl
De Miguel, Benito
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Eberlé, Enrique
Espil, Alberto
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos
Garona, Juan A.

Godoy, Raúl
Güerci, José María
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Victor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Hernández, Victorio
Horne, Bernardino
Illanes, Eloy J.
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Izurieta Fourquet, Agustín
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Kabayan, Juan
Lanús, Adolfo
Lazo, Plácido C.
Lezica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Solano
López, Héctor S.
López, García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Martínez, Gregorio N.
Martínez, Manuel
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.
Morrogh Bernard, Juan F.
Mugica, Adolfo
Muniagurria, Walter Julio
Noel, Carlos M.
Noel, Martín
Onsari, Fabián
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel

Osoros Soler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Pagano, David J.
Palacio, Benjamin
Pandolfo, Pio
Pastor, Reynaldo A.
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pizarro, Néstor A.
Quintana, Fenelón
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio I.
Saá, Alberto
Saccone, Romeo D.
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez Julián
Sánchez, Adolfo B.
Schoo Lastra, Dionisio
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solis, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa
Teisaire, Eduardo (h.)
Urien, Enrique César
Vélez, Francisco M.
Videla Dorna, Daniel
Vilgré La Madrid, Juan
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Agulla, Juan Carlos
Arbeletche, Aníbal P.
Arias Uriburu, Juan
Busaniche, Julio A.
Devoto Acosta, Alcibiades
Duffy, Eduardo N.
Fazio Rojas, Lorenzo
Ferreira, Antenor R.
Figueroa, Julio A.
Ghioldi, Américo
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamin S.
Grassi, Alfredo
Grisolia, Luis
Guerrero, José Rafael
Mihura, Enrique F.
Moreno, Ricardo A.
O'Reilly, Guillermo R.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Lamón D.
Pita, Carlos A.
Radio, Pedro
Rodríguez, Alfredo
Sáenz, Mario
Simón Padrós, J.
Siri, Obdulio F.

AUSENTE CON AVISO:

Vásquez, Juan Carlos

AUSENTES, SIN AVISO:

Barriónuevo, Gerardo
Boero, Albino
Carús, Agustín J.
Critto, Miguel
Gómez Grandoli, Clemente
Martínez, F. Benigno
Prat Gay, Fernando de
Vilchez, Martín

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Indicación del señor diputado Cooke, sobre inserción de una nota en el Diario de Sesiones. Es aprobada.
- 4.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se acuerda al Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico la autorización para ocupar una fracción de terreno en las adyacencias de la dársena 5, del Puerto Nuevo de la Capital.
- II.—Comunicaciones oficiales.
- III.—Peticiones particulares.

- IV.—Proyecto de ley del señor diputado **Guiglielmelli**, declarando monumento nacional la capilla del Plumerillo, ubicada en el departamento Las Heras (Mendoza).
- V.—Proyecto de ley del señor diputado **Guillot** y otros, sobre reglamentación de la profesión de ingeniero, arquitecto y agrimensor.
- VI.—El señor diputado **Cisneros** y otros reproducen un proyecto de ley de intervención federal a la provincia de Buenos Aires.
- VII.—Proyecto de ley del señor diputado **Cafferata** y otros, sobre terminación de las obras del colegio incorporado Sagrado Corazón de Villa Dolores (Córdoba).
- VIII.—Proyecto de ley del señor diputado **Eyto**, sobre edificio de la oficina de Correos y Telégrafos en San Antonio de Areco (Buenos Aires).
- 5.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones a los señores diputados: **Moreno**, **Arias Uriburu**, **González**, **Grassi**, **Devoto Acosta** y **Busaniche**.
- 6.—Orden de la labor.
- 7.—Termina la consideración del proyecto de resolución del señor diputado **Horne**, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo, sobre la ley de carnes, número 11.747, constitución actual de la Junta Nacional de Carnes y cuestiones conexas. Es aprobado.
- 8.—Designación de comisión.
- 9.—Se aprueba el despacho de la Comisión de Legislación General, en el proyecto de ley por el que se declara monumento nacional al Colegio Nacional de Montserrat.
- 10.—Indicación del señor diputado **Guerci**, sobre pronto despacho por la Comisión de Presupuesto en el proyecto de ley sobre contribución a los gastos de envío de la delegación argentina al Congreso Mundial de la Juventud, a celebrarse en Nueva York.
- 11.—Orden de la labor.
- 12.—Proyecto de declaración del señor diputado **Sammartino**, sobre el problema migratorio. Pasa a comisión.
- 13.—Proyecto de resolución del señor diputado **Cisneros**, por el cual se solicitan informes al Poder Ejecutivo, relacionados con la zona económica de Bahía Blanca, colonización y cuestiones conexas. Queda en suspenso.
- 14.—Moción del señor diputado **Ravignani**, para que se trate sobre tablas el proyecto de declaración a que se refiere el número 12 de este sumario. Queda en suspenso.
- 15.—Se aprueba el proyecto de resolución a que se refiere el número 13 de este sumario.

- 16.—Se considera y rechaza la moción de sobre tablas, a que se refiere el número 14 de este sumario.
- 17.—Proyecto de resolución del señor diputado **Dickmann**, sobre nombramiento de una comisión especial investigadora del cumplimiento de las leyes números 6.026, 11.333 y 12.343 y decreto del Poder Ejecutivo número 91.747, relacionados con el policlínico José de San Martín. Pasa a comisión.
- 18.—Proyecto de resolución del señor diputado **Damonte Taborda**, sobre realización de una sesión especial de asamblea, con motivo de la concertación de la paz del Chaco. Es aprobado.
- 19.—Proyecto de declaración de los señores diputados **Pizarro** e **Illanes**, sobre ejecución del plan de obras públicas en las provincias. Pasa a comisión.
- 20.—Se considera el despacho de la Comisión de Guerra y Marina en el proyecto de ley sobre gendarmería nacional.

—En Buenos Aires, a catorce días del mes de julio del año 1938, siendo la hora 15 y 59:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Solari (F. C.). — Entiendo, señor presidente, que hay 95 señores diputados en la casa. por lo que hago moción de que esperemos 15 minutos, a fin de que se forme quórum.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando.

—Siendo la hora 16 y 10:

2

ACTA

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con asistencia de 85 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Quintana se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

del Poder Ejecutivo y considero que la Cámara vería con agrado que todas las provincias fueran tratadas en igualdad de condiciones.

Sr. Lazo. — Pero si no se conoce el decreto, se estaría prejuzgando.

Sr. Pizarro. — No prejuizo. El decreto debería estar ya.

Sr. Lazo. — Por otra parte, desearía que se me informase si hay alguna disposición que obligue al Poder Ejecutivo a enviar el decreto a la Cámara. Si hay incumplimiento de parte del Poder Ejecutivo, votaré la proposición; pero en la forma en que está redactada, entiendo que no corresponde.

Sr. Pandolfo. — Pido la palabra.

Creo que el asunto es complejo y no tan fácil como lo plantea el autor de la declaración. Entiendo que la Cámara necesita informarse previamente. He visto publicado en los diarios la distribución de las obras públicas referentes a la provincia de Santa Fe. Me parece que eso está comprendido en el plan general de trabajos.

Sr. Pizarro. — Se trataba del primer cuatrimestre.

Sr. Pandolfo. — Ahora correspondería saber si hay una distribución para el segundo cuatrimestre.

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Sí, señor diputado; ha salido el plan para el resto del año.

Sr. Lazo. — Por 159.000.000 de pesos.

Sr. Pandolfo. — Por eso, la declaración que formula el señor diputado estaría de más. Apoyo, pues, la indicación del señor diputado Lazo, para que pase a comisión.

Sr. Guglielmelli. — Si hay tantas divergencias, que pase a comisión.

Sr. Osorio. — Pido la palabra.

Voy a votar en contra de que se trate sobre tablas el proyecto de declaración. Y si la Cámara resolviera considerarlo de inmediato, votaré en contra del proyecto, porque se trata de la aplicación de un artículo de la ley de presupuesto, cuya reglamentación corresponde al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Se va a votar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración.

— Resulta negativa de 40 votos. Votan 81 señores diputados.

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Pasará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

20

GENDARMERIA NACIONAL

(Orden del día número 18)

Honorable Cámara:

La Comisión de Guerra y Marina ha considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, sobre creación y organización de la gendarmería nacional; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra sanción.

Sala de la comisión, junio 23 de 1938.

Francisco M. Vélez. — José C. Susan. — Dionisio Schoo Lastra. — I. Mario Castex. — Aníbal P. Arbelletche. — Daniel Videla Dorna. — Marcelo Zunino. — Alfredo Rodríguez.

Buenos Aires, septiembre 24 de 1936.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el proyecto de ley sobre creación y organización de la gendarmería nacional, que paso en revisión a esa Honorable Cámara.

Dios guarde al señor presidente.

*JULIO A. ROCA.
Gustavo Figueroa.*

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Creación

Artículo 1º — Créase la gendarmería nacional con el carácter de policía militarizada federal, sin que esto importe considerarla como parte integrante del ejército de la Nación, del

cual es independiente, salvo en los casos expresamente determinados en esta ley.

Art. 2º — En su carácter de policía federal, tiene como misión:

- a) Velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública;
- b) Asegurar el cumplimiento de las leyes de la Nación y demás disposiciones legales.

Art. 3º — Sus funciones se ejercen:

- a) En todos los lugares sujetos a jurisdicción federal, con excepción de los sometidos a jurisdicción militar;
- b) En cualquier parte de la Nación, siempre que sean requeridas para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.

Art. 4º — Dependerá del Ministerio del Interior, excepto en los casos expresamente determinados en esta ley.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo está facultado para poner bajo la dependencia directa y única del Ministerio de Guerra a la gendarmería o a parte de las mismas, en los siguientes casos:

- a) Estado de sitio;
- b) Exigencias de la defensa nacional;
- c) Movilización del ejército;
- d) Cuando sea imprescindible para el mantenimiento del orden interno.

Art. 6º — En caso de guerra nacional las fracciones de la gendarmería nacional que no tengan destino de movilización en los ejércitos de campaña o en zonas declaradas de guerra, procederán de acuerdo con lo que el Código de Justicia Militar prescribe para «comisarios de policía». Todo el personal de gendarmería que preste servicios militares en caso de guerra se considerará parte integrante de la reserva del ejército permanente.

Art. 7º — En todo lo que se relacione con su instrucción, su personal estará sometido a las leyes y reglamentos establecidos para el ejército, como asimismo a los que el Poder Ejecutivo dicte para su servicio especial.

En lo relativo a la disciplina estará sometido al régimen del ejército y, en consecuencia su personal se encontrará comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Justicia Militar.

A estos fines, dependerá del Ministerio de Guerra.

Art. 8º — Los delitos y faltas cometidas por los particulares contra el personal de la gendarmería en ejercicio de sus funciones, se considerarán como realizados contra la policía, excepto en los casos que corresponda la aplicación de las disposiciones del Código de Justicia Militar.

Art. 9º — El Ministerio de Guerra ejercerá de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, las funciones de inspección sobre la gendarmería nacional en lo relativo a la instrucción militar, disciplina, así como en lo referente a la conservación del armamento y equipo.

Art. 10. — El Poder Ejecutivo queda autorizado para incorporar a la gendarmería nacional el personal de policía marítima, guardia cárceles, o parte de los mismos, así como el personal de aduana que ejerza sus funciones dentro de la jurisdicción de las inspecciones determinadas por el artículo 14.

Art. 11. — Ninguna autoridad podrá emplear, ni aislada ni conjuntamente al personal de la gendarmería nacional, en funciones ajenas a las establecidas en esta ley, a las de su servicio especial y a las de orden interno de las distintas agrupaciones en que se subdivide.

CAPÍTULO II

Organización

Art. 12. — La gendarmería nacional se organizará en escuadrones o compañías, o en ambas a la vez, según lo determine el Poder Ejecutivo.

Estas unidades se agruparán únicamente a los efectos de la administración, contralor y comando, y se reunirán en casos especiales que así lo impongan, en medios regimientos o regimientos, según las necesidades. El comando de todas las fuerzas de gendarmería nacional será ejercido por la dirección general de gendarmería a cargo de un coronel del ejército permanente, cuyos servicios se considerarán como prestados en el mismo.

Art. 13. — El Poder Ejecutivo reglamentará la organización, dotación, régimen interno de las unidades, como asimismo el servicio de gendarmes dentro y fuera de los lugares poblados, de acuerdo con las circunstancias y modalidades que cada región imponga.

Art. 14. — Habrá como máximo, los siguientes comandos y unidades de gendarmería nacional:

- a) Una dirección general, cuyo asiento será determinado por el Poder Ejecutivo;

b) Tres inspecciones, a saber:

Inspección Norte, que comprende a los territorios del Chaco, Formosa, Misiones y Los Andes.

Inspección Centro, que comprende a los territorios de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Inspección Sur, que comprende a los territorios de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

c) El número de escuadrones y compañías que fueren necesarios, incluso las de depósito-escuelas.

El Poder Ejecutivo determinará en cada caso el número de unidades que se afectarán a cada una de las inspecciones, como así también su agrupamiento, de acuerdo con las necesidades.

Art. 15. — El régimen administrativo será fijado por el Poder Ejecutivo.

En cada unidad aislada, desde el escuadrón o compañía inclusive, se crearán «juntas de administración» con atribuciones y responsabilidades que les marquen las leyes y reglamentos respectivos.

Las inspecciones administrativas se efectuarán por personal del Ministerio de Guerra conjuntamente con personal técnico del Ministerio del Interior.

TITULO II

Personal

CAPÍTULO I

Art. 16. — El personal de la gendarmería nacional no tiene estado militar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la presente ley.

Sus servicios se considerarán como prestados en «servicio temporal» en la reserva del ejército permanente, conforme a lo dispuesto en la ley del personal del ejército, pero siempre en la gendarmería nacional, sin que, en ningún caso, puedan pasar a otras formaciones del ejército.

Art. 17. — Habrá en la gendarmería nacional como base, el número de oficiales que a continuación se determinan:

- 4 Inspectores de gendarmería, con categoría de jefes de regimientos.
- 8 Subinspectores de gendarmería, con categoría de jefes de medios regimientos.
- 24 Comandantes de gendarmería, con categoría de comandantes de escuadrón o compañía.

32 Segundos comandantes de gendarmería, con categoría de jefes de puesto.

80 Auxiliares de gendarmería, con categoría de segundos jefes de puesto.

1 Asesor letrado, con categoría de subinspector de gendarmería.

1 Médico inspector, con categoría de subinspector de gendarmería.

14 Médicos de escuadrón, con categoría de comandantes de gendarmería.

1 Inspector aprovisionador, con categoría de comandante de gendarmería.

3 Aprovisionadores de 1ª, con categoría de segundos comandantes de gendarmería.

16 Aprovisionadores de 2ª, con categoría de auxiliares de gendarmería.

1 Farmacéutico de 1ª, con categoría de segundo comandante de gendarmería.

4 Farmacéuticos de 2ª, con categoría de auxiliares de gendarmería.

1 Veterinario de 1ª, con categoría de segundo comandante de gendarmería.

7 Veterinarios de 2ª, con categoría de auxiliares de gendarmería.

Art. 18. — El personal de tropa de la gendarmería nacional estará inicialmente constituido por los siguientes clases y gendarmes:

25 Ayudantes de 1ª de gendarmería.

53 Ayudantes de 2ª de gendarmería.

100 Subayudantes de 1ª de gendarmería.

130 Subayudantes de 2ª de gendarmería.

150 Subayudantes de 3ª de gendarmería.

2 Enfermeros de 1ª de gendarmería, con categoría de subayudantes de 1ª.

5 Enfermeros de 2ª de gendarmería, con categoría de subayudantes de 2ª.

14 Enfermeros de 3ª de gendarmería, con categoría de subayudantes de 3ª.

2 Guardalmacenes de 1ª de gendarmería, con categoría de subayudantes de 1ª.

20 Guardalmacenes de 2ª de gendarmería, con categoría de subayudantes de 2ª.

3.000 Gendarmes.

Art. 19. — El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para adscribir a cada escuadrón, compañía o grupo de gendarmería el número de maestros de escuela que fuera necesario para el funcionamiento, anexo a los mismos o a sus destacamentos, de cursos de enseñanza primaria, destinados a los menores de edad con obligación escolar, en lugares donde no funcionan escuelas o donde ellas sean insuficientes.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo adscribirá también maestros de escuela y agrónomos en las colonias a que se refiere el artículo 49 de esta ley.

CAPÍTULO II

Reclutamiento. — Baja. — Situación del personal

Art. 21. — Son condiciones indispensables para ingresar a la gendarmería nacional:

1. Ser argentino;
2. Tener antecedentes de buena conducta;
3. Haber hecho el servicio militar como conseripto o aspirante a oficial de reserva o haber prestado servicios voluntarios durante un año, por lo menos, como soldado, cadete, clase, u oficial o haber desempeñado puesto de agente de policía, clase u oficial de policía, por lo menos cinco años. Si el Poder Ejecutivo creara escuelas de oficial, clases o gendarmes, bastará el certificado de haber aprobado los cursos correspondientes;
4. Poseer las condiciones físicas y satisfacer las pruebas que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo reglamentará las comisiones necesarias para juzgar, analizar antecedentes personales, tomar examen, etcétera, así como la forma en que las condiciones mencionadas en el artículo anterior deberán ser apreciadas para el ingreso del personal de oficiales y tropa de gendarmería.

Art. 23. — El nombramiento de los oficiales de la gendarmería nacional se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo de acuerdo con los informes a que diera lugar las comisiones asesoras mencionadas en el artículo anterior.

Art. 24. — El nombramiento de los clases será efectuado por el Ministerio del Interior a propuesta del director general de gendarmería, basado en el informe de las comisiones correspondientes, cuyos testimonios y el contrato de servicios deben estar agregados al expediente respectivo.

Art. 25. — El nombramiento de los gendarmes y el ingreso a las escuelas de gendarmes y de clases de gendarmería será acordado por el director general de gendarmería a propuesta de los jefes de regimientos, debiendo agregarse a los expedientes respectivos el contrato de servicios y el informe del comandante de la unidad o de la escuela, ante el cual se ha firmado.

Art. 26. — Además de las condiciones generales indicadas en el artículo 21, el Poder Ejecutivo establecerá las condiciones especiales indispensables para el ingreso de oficiales, clases y gendarmes, provengan éstos del ejército o de las escuelas respectivas de gendarmería.

Art. 27. — El personal de médicos, farmacéuticos, veterinarios y de administración de gendarmería, será designado entre los profesionales que reuniendo las condiciones generales establecidas para los demás oficiales, acrediten los títulos correspondientes a su profesión y satisfagan las pruebas que el Poder Ejecutivo determine. Su ingreso será al grado inferior de la respectiva categoría.

Art. 28. — La baja de los oficiales de gendarmería se concederá a solicitud del interesado. Su destitución se impondrá en las formas y con los requisitos establecidos para la destitución de los empleados de la administración pública nacional. Si se diera de baja en estas condiciones a oficiales del ejército, el expediente respectivo será pasado, una vez decretada la destitución, al Ministerio de Guerra, y el causante sometido al tribunal de honor correspondiente.

Art. 29. — En los casos en que por aplicación de lo establecido en el artículo 7º, el personal de gendarmería hubiese sido condenado por un tribunal militar a suspensión de mando o suspensión de empleo, como pena principal o accesoria, se aplicará la de suspensión de empleo como empleado civil; si la pena fuera de confinamiento se reemplazará por la destitución.

Art. 30. — Las licencias del personal de oficiales y tropa de gendarmería se concederán en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO III

Ascensos

Art. 31. — Los ascensos se concederán para cubrir vacantes y siempre de grado a grado y por selección de los más aptos.

Art. 32. — Para ascender al grado inmediato superior, son condiciones imprescindibles:

1. Haber prestado en el grado y en gendarmería los siguientes tiempos mínimos de servicios;
 - a) Grado de tropa y clase; un año;
 - b) Auxiliares; cuatro años;
 - c) Segundos comandantes, comandantes y subinspectores; cuatro años.

2. Haber demostrado condiciones para desempeñar las funciones del grado a invertir, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo;
3. Ser propuesto por la comisión informativa de méritos, a que hace referencia el artículo 33, tratándose de oficiales, o por el jefe de la unidad para clases.

Art. 33. — En la gendarmería habrá una comisión informativa de méritos, compuesta por el director general de gendarmería e integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, la que tendrá como misión clasificar anualmente a los oficiales hasta subinspector, inclusive, que cumplan o hayan cumplido el tiempo mínimo en el grado de auxiliar, emitiendo su juicio sobre las aptitudes y servicios de los clasificados. Sus conclusiones son de carácter informativo. El personal mencionado no podrá ser ascendido si no media propuesta de la comisión informativa de méritos.

Art. 34. — Los ascensos en los grados de clases se darán dentro del regimiento y por selección.

Art. 35. — El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo referente a los legajos personales y calificación de oficiales y clases, como asimismo las condiciones particulares de ascensos de oficiales, las normas a seguir por la comisión informativa de méritos y las condiciones de ascensos de los clases.

CAPÍTULO IV

Jubilación y pensión

Art. 36. — El personal de la gendarmería no procedente del ejército o de la armada, en retiro, tiene derecho a la jubilación y pensión en la forma establecida para la policía de la Capital Federal, con las excepciones y modificaciones establecidas en la presente ley.

Art. 37. — Los servicios prestados en la gendarmería por oficiales y clases retirados del ejército o armada, se computarán para bonificar la pensión de retiro establecida en la ley del personal del ejército, a cuyo fin se practicarán los descuentos prescriptos por el artículo 12 de la ley número 11.821, de creación del fondo para la Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada, los que ingresarán a dicho fondo.

Art. 38. — El personal de gendarmería de-

berá jubilarse obligatoriamente cuando alcance las siguientes edades:

Inspectores	60 años
Subinspectores	57 "
Comandantes	53 "
Segundos comandantes	50 "
Auxiliares	50 "
Tropa	50 "

Art. 39. — El personal de gendarmería que quede inutilizado para sus funciones en la misma, siempre que la inutilización se hubiere producido en ejercicio de sus funciones y esté debidamente comprobado que el causante obró en cumplimiento de sus deberes, tendrá derecho a la jubilación en las condiciones fijadas para el personal civil del Ministerio de Guerra.

Art. 40. — En el caso de que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º, la gendarmería fuera incorporada al ejército transitoriamente, como reserva del ejército permanente, el personal gozará del derecho a retiro en la forma establecida para el personal que constituye dicha reserva. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y proporción en que deberán pasar los fondos depositados en la Caja de Pensiones y Jubilaciones Civiles y sus intereses al fondo de la Caja de Retiros y Pensiones Militares.

CAPÍTULO V

Contratos, bonificaciones, recompensas

Art. 41. — El personal de tropa firmará a su ingreso un contrato de servicios, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo. Estos contratos podrán ser renovados hasta alcanzar los límites de edad fijados en el artículo 38.

La reglamentación que el Poder Ejecutivo establezca a este respecto y los artículos 50, 51, 52 y 54 de la presente ley deberán figurar en los contratos de servicios.

Art. 42. — El sueldo de los gendarmes no será inferior al salario mínimo, no computándose en él lo correspondiente a racionamiento y vestuario.

Art. 43. — El sueldo de los clases de gendarmería, no podrá ser inferior al establecido para los grados equivalentes del ejército permanente según cuadro 1.

Art. 44. — El personal de oficiales de gendarmería gozará de un sueldo no inferior al sueldo, incluso emolumentos de servicio efectivo, de los oficiales del ejército permanente, de acuerdo al cuadro 1.

Art. 45. — El personal de tropa de la gendarmería, casado, tendrá derecho a la concesión de lotes de hogar en los términos que establece la presente ley y la ley número 10.284.

CAPÍTULO VI

Art. 46. — El Ministerio de Agricultura pondrá a disposición del Ministerio del Interior y del Ministerio de Guerra, según corresponda y a medida que éstos lo requieran, las siguientes fracciones de tierras fiscales:

- a) Dos fracciones de diez mil hectáreas cada una, en el territorio de La Pampa;
- b) Tres fracciones de diez mil hectáreas cada una, en el territorio de Río Negro;
- c) Tres fracciones de diez mil hectáreas cada una, en el territorio de Neuquén;
- d) Tres fracciones de diez mil hectáreas cada una y una de cinco mil hectáreas en el territorio de Chubut;
- e) Tres fracciones de diez mil hectáreas cada una, en el territorio de Santa Cruz;
- f) Una fracción de diez mil hectáreas, en el territorio de Tierra del Fuego;
- g) Dos fracciones de cinco mil hectáreas cada una, en el territorio de Misiones;
- h) Tres fracciones de diez mil hectáreas cada una, en el territorio de Formosa;
- i) Dos fracciones de diez mil hectáreas cada una, en el territorio del Chaco.

El Poder Ejecutivo reglamentará la proporción de estas tierras que corresponda a cada uno de los ministerios mencionados.

Art. 47. — La ubicación de cada una de las fracciones de tierra a que se refiere el artículo anterior será determinada en el terreno, por una comisión constituida por el director general de gendarmería nacional, un oficial y un veterinario designados por el Ministerio de Guerra, un ingeniero agrónomo y un ingeniero de la Dirección de Irrigación, designados por los ministerios de Agricultura y de Obras Públicas, respectivamente.

La elección de las tierras se hará de acuerdo con los siguientes requisitos:

- a) Ser aptas para establecer en ellas colonias del hogar y poseer, si fuera necesario, facilidades para regadío en el momento en que se las elija;
- b) La ubicación debe responder a los fines de la gendarmería nacional;

- c) Las destinadas al Ministerio de Guerra deberán satisfacer las condiciones especiales que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 48. — El Ministerio de Guerra mensurará, amojonará y hará levantar los planos de las fracciones de tierras aludidas en el artículo 46, con personal a sus órdenes, corriendo con los gastos que demande su ejecución los ministerios del Interior, de Justicia e Instrucción Pública y de Guerra, según destino de las tierras.

Art. 49. — Cada una de las fracciones de tierras indicadas en el artículo 46, servirá de base para la formación de una «colonia del hogar», conforme a lo establecido en los artículos 5º y 9º de la ley número 10.284. Se reservará una parte de las mismas a disposición del Ministerio de Guerra para el establecimiento de campos de maniobras de tiro o de remonta y otra a disposición del Ministerio del Interior para la gendarmería nacional.

Art. 50. — De la parte correspondiente al Ministerio del Interior se entregará debidamente mensurada y amojonada al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a medida que éste lo solicite, una parte no menor del 10 % de cada una de las fracciones mencionadas en el artículo 46, para los fines establecidos en el artículo 5º de la ley número 10.284.

Art. 51. — Los suboficiales y clases del ejército y de la armada, los ex clases, los ex conscriptos de los territorios nacionales y el personal de tropa de gendarmería que sean casados, y los herederos forzosos de los miembros del ejército y armada que soliciten lotes en las colonias del hogar, tendrán derecho preferente a su concesión, así como a la elección de los mismos, y para los fines establecidos en el artículo 14 de la ley número 10.284.

Art. 52. — A cada propietario de un lote de hogar que se comprometa a construir casa-habitación para sí y familia se le concederá, además, un lote en las fracciones destinadas a pueblo.

Art. 53. — El director general de gendarmería y los oficiales de gendarmería tendrán derecho a un solo lote de hogar y en sólo una colonia, pero no podrán adquirir otro durante su servicio. Si fueren casados tendrán derecho, además, hasta una hectárea en los pueblos a que se hace referencia en el artículo 52. Estos lotes serán concedidos gratuitamente siempre que se obliguen a construir casa-habitación para sí y familia.

Art. 54. — Ni los inspectores, ni los oficiales de gendarmería podrán arrendar o comprar propiedades inmuebles, excepto los destinados

a habitación, en los territorios nacionales, durante sus servicios, así como tampoco negociar directa ni indirectamente en ganado o en productos de la tierra que no sean productos de sus propios lotes de hogar. Las transacciones hechas en violación del presente artículo y las realizadas entre el personal de gendarmería, serán nulas y sin valor alguno.

Art. 55. — Autorízase al Ministerio de Guerra a arrendar las fracciones de tierra asignadas al mismo, en lotes no mayores de cinco mil hectáreas y por un plazo no mayor de cinco años, previo contrato en escritura pública, en papel simple ante el escribano de gobierno y con la condición expresa de que las mejoras introducidas, así como una parte de la hacienda que se determinará claramente, quedará en beneficio del Estado.

El producido de estos arrendamientos se destinará a la adquisición de ganado para el ejército, a la mejora de los campos y arreglo de caminos en ellos.

Art. 56. — Igual autorización se concede al Ministerio del Interior respecto a las fracciones de tierras no ocupadas por lotes de hogar. El producido de estos arrendamientos se destinará a construcciones y mejoras de los alojamientos de la gendarmería nacional.

Art. 57. — Los arrendamientos a que se refieren los artículos 54 y 55 de la presente ley y el artículo 5º de la ley número 10.284, serán concedidos de preferencia a los propietarios de lotes de hogar, excepto oficiales de gendarmería y únicamente a falta de interesados entre ellos, podrán adjudicarse a personas extrañas a la colonia.

Art. 58. — El Poder Ejecutivo queda facultado para designar como jefes civiles de las oficinas de Correos y Telégrafos, de Registro Civil e inspectores de las escuelas de las colonias que se crean por la presente ley, a los oficiales y clases de gendarmería que tengan el comando de la unidad o destacamento que la guarnezca, sin que estas funciones den derecho a sobresueldos o remuneración especial.

TITULO III

Disposiciones transitorias

Art. 59. — Declárase de utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de

cuarteles y casas alojamientos para las unidades de gendarmería.

Art. 60. — El Poder Ejecutivo procederá a disponer las construcciones necesarias al efecto y la adquisición de materiales, armamentos, ganado, equipo y vestuarios necesarios para la organización de la gendarmería nacional.

Art. 61. — El Ministerio de Guerra organizará la gendarmería nacional, que pondrá a disposición del Ministerio del Interior, totalmente organizada, antes de los tres años de estar en vigor la presente ley. Durante el citado plazo, el Ministerio de Guerra por propia resolución podrá disponer la separación de los oficiales, clases y gendarmes, así como el alta del personal de tropa, y propondrá al Poder Ejecutivo el nombramiento de los oficiales.

Art. 62. — Para organizar la gendarmería nacional, facúltase al Poder Ejecutivo a disponer el pase en comisión, de los oficiales del ejército permanente que sean necesarios y por un plazo que no excederá de dieciocho meses. Los servicios prestados por dichos oficiales serán computados como servicios en el mando efectivo en unidades de tropa.

Art. 63. — Todo el personal de la gendarmería nacional será designado «en comisión» mientras dure la organización, recibiendo la efectividad recién cuando la gendarmería pase a depender del Ministerio del Interior.

Art. 64. — Destínase la suma de 2.000.000 de pesos moneda nacional para la construcción de cuarteles y alojamientos para la tropa y demás dependencias de la gendarmería. Estos 2.000.000 de pesos serán entregados en títulos del Crédito Público Argentino, los que serán completados posteriormente con la suma a percibir por aplicación del artículo 62 de esta ley.

Art. 65. — Mientras no se incluya en la ley general de presupuesto, el gasto que demande la ejecución de la presente ley, se abonará de rentas generales imputándose a la misma.

Art. 66. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a 24 de septiembre de 1936.

JULIO A. ROCA.
Gustavo Figueroa.

Cuadro I

Equivalencia de grados del ejército y gendarmería

<u>Categoría</u>	<u>Ejército de línea</u>	<u>Gendarmería nacional</u>
Oficiales	Teniente coronel	Inspector
	Mayor	Subinspector
	Capitán	Comandante
	Teniente 1º	Segundo comandante
	Teniente y subteniente	Auxiliar
Clases	Suboficial, mayor y principal	Ayudante de 1ª
	Sargento ayudante y 1º	Ayudante de 2ª
	Sargento	Subayudante de 1ª
	Cabo 1º	Subayudante de 2ª
	Cabo	Subayudante de 3ª
Tropa	Soldado	Gendarme

Cuadro II

Grados y categoría de gendarmería nacional

OFICIALES		
<u>Efectivos</u>	<u>GRADOS</u>	<u>CATEGORIAS</u>
4	Inspectores de gendarmería	Jefes de regimiento
8	Subinspectores de gendarmería	Jefes de medios regimientos
24	Comandantes de gendarmería	Comandantes de escuadrón
32	Segundos comandantes de gendarmería	Jefes de puesto
80	Auxiliares de gendarmería	Segundos jefes de puesto
1	Asesor letrado	Subinspector de gendarmería
1	Médico inspector	Subinspector de gendarmería
14	Médicos de escuadrón	Comandantes de gendarmería
1	Inspector aprovisionar	Comandante de gendarmería
3	Aprovisionadores de 1ª	Segundo comandante de gendarmería
16	Aprovisionadores de 2ª	Auxiliares de gendarmería
1	Farmacéutico de 1ª	Segundo comandante de gendarmería
4	Farmacéuticos de 2ª	Auxiliares de gendarmería
1	Veterinario de 1ª	Segundo comandante de gendarmería
7	Veterinarios de 2ª	Auxiliares de gendarmería

Cuadro III

Grados y categorías de gendarmería nacional

CLASES		
<u>Efectivos</u>	<u>GRADOS</u>	<u>CATEGORIAS</u>
25	Ayudantes de 1ª de gendarmería	
53	Ayudantes de 2ª de gendarmería	
100	Subayudantes de 1ª de gendarmería	
130	Subayudantes de 2ª de gendarmería	
150	Subayudantes de 3ª de gendarmería	
2	Enfermeros de 1ª de gendarmería	Subayudante de 1ª de gendarmería
5	Enfermeros de 2ª de gendarmería	Subayudante de 2ª de gendarmería
14	Enfermeros de 3ª de gendarmería	Subayudante de 3ª de gendarmería
2	Guardalmacenes de 1ª de gendarmería	Subayudante de 1ª de gendarmería
20	Guardalmacenes de 2ª de gendarmería	Subayudante de 2ª de gendarmería

PLANILLA I

Cálculo aproximado de gastos de organización inicial

DESIGNACION	COSTO \$ m/n.	
	Unitario	Total
Construcción de cuarteles y alojamientos (artículo 64)	—	2.000.000
Para muebles y enseres de oficina	—	100.000
Para adquisición de 4.300 caballos y mulas	150	645.000
" " " 33 carros c/arneses	800	26.400
" " " 23 camiones	3.000	69.000
" " " 11 automóviles livianos	3.000	33.000
" " " 30 motocicletas	1.000	30.000
" " " 3.500 juegos de montar	120	420.000
" " " 3.500 juegos de cama	50	175.000
Para gastos iniciales de reclutamiento, viáticos y varios	—	100.000
Para eventuales	—	25.000
Total general		3.623.400

Otros gastos iniciales de organización

1. — *Armamento*: A calcular de acuerdo con la dotación que reglamente el Poder Ejecutivo (artículo 13).
2. — *Vestuario*: A calcular de acuerdo con la dotación que reglamente el Poder Ejecutivo (artículo 13).
3. — *Equipo*: A calcular de acuerdo con la dotación que reglamente el Poder Ejecutivo (artículo 13).

PLANILLA II

Gastos anuales de mantenimiento, de administración y generales

DESIGNACION	GASTOS \$ m/n.	
	Mensuales	Anuales
Racionamiento para 501 clases, a \$ 30.— por plaza	15.030	180.360
Racionamiento para 3.000 gendarmes, a \$ 22.— por plaza	66.000	792.000
Racionamiento para 4.300 caballos, a \$ 18.— cada uno	77.400	928.800
Vestuario y equipo para 3.501 hombres, a \$ 220 por plaza	—	770.220
Para reposición de ganado	—	30.000
Gastos de oficina, reparaciones, nafta y lubricantes y demás gastos menores y generales de la Dirección General, inspecciones y regimientos	—	150.000
Fletes y transportes	—	50.000
Reparación de armamento, equipo y material	—	30.000
Adquisición de repuestos	—	—
Total general		2.931.380

PLANILLA III

SUELDOS

Efectivos	Denominaciones	Equivalencia de grados en el ejército	Promedio de sueldo	Sueldos	Sueldos en el ejército	Total mensual	Total anual
\$ m/n.							
4	Inspector	Teniente coronel		1.200	1.200	4.800	57.600
10	Sub. inspector	Mayor		930	930	9.300	111.600
39	Comandante	Capitán		680	680	26.520	318.240
37	2º comandan.	Teniente 1º		520	520	19.240	230.880
107	Auxiliar	Teniente - sublt.	417	465-370	465-370	44.619	535.428
25	Ayudante 1º	Subf. May. Ppal.	375	400-350	400-350	9.375	112.500
53	Ayudante 2º	Srgt. ayud. srgt. 1º	280	300-260	300-260	14.840	178.080
104	Sub. ayud. 1º	Sargento		210	210	21.840	262.080
155	Sub. ayud. 2º	Cabo 1º		190	180	29.450	353.400
164	Sub. ayud. 3º	Cabo		170	150	27.880	334.560
3.000	Gendarme	Soldado voluntario		160	90	48.000	5.760.000
Total . . .						687.864	8.254.368

RESUMEN

\$ m/n.

I. — Gastos de organización:

1. — Según planilla I 3.623.400.—
2. — A calcular: armamento, vestuario y equipo —

II. — Gastos anuales de mantenimiento:

1. — Según planilla II 2.931.380.—
2. — Según planilla III 8.254.368.—

Total del año 11.185.748.—

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — En consideración en general.

Sr. Biancofiore. — Como el señor ministro de Guerra se encuentra en antecala, pido a la Presidencia que lo invite a pasar al recinto.

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Así lo ha hecho la Secretaría, señor diputado.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la Comisión de Guerra y Marina.

Sr. Susan. — He considerado siempre que toda iniciativa, todo proyecto que motive la inversión de sumas, tanto más si éstas son elevadas, debe merecer la atención del legislador, para establecer con criterio exacto su necesidad y la justicia de esas inversiones.

Partiendo de esa premisa, señor presidente, he tratado de comprobar si el proyecto que viene despachado favorablemente del Senado, y está en estos momentos a consideración de la Honorable Cámara llena los requisitos de necesidad, eficacia y de utilidad pública indispensables para plantear una reforma seria como la que se proyecta, a prácticas administrativas existentes, y si ella justificaría con su implantación los gastos que la ejecución de la ley demande.

Mi exposición explica la razón del voto de la mayoría de la Comisión de Guerra y Marina que me ha conferido el honor de informar el despacho, la que entiende dar con esta ley un

instrumento serio de organización a la policía de nuestros extensos y despoblados territorios, contribuyendo con ello de manera efectiva a su progreso, tranquilidad y nacionalización, motivos todos que no pueden ser desatendidos por los poderes públicos en ningún momento.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Es posible, señor presidente, que se piense pudiéramos seguir con la organización actual, introduciendo en ella paliativos que a nada conducen, pero si abarcamos la importancia enorme que los territorios nacionales han alcanzado en los últimos tiempos, los intereses materiales considerables que el Estado debe resguardar y otras situaciones de carácter social y legal que igualmente deben ser atendidas, llegaremos necesariamente a la conclusión de que la situación existente debe ser substancialmente mejorada y reformada, y a ello tiende este proyecto que auspicia la mayoría de la Comisión de Guerra y Marina.

Desde tiempo atrás ha existido en el pensamiento de nuestros hombres de gobierno, la idea de dotar a los territorios nacionales de una policía organizada seriamente para resguardar los intereses de aquellas poblaciones generalmente desamparadas, pensamiento que viene desde hace muchos años, y así vemos que en 1877, el presidente Avellaneda intentó la creación de una gendarmería destinada exclusivamente al servicio del territorio del Chaco.

En 1913 se presentó a esta Honorable Cámara un proyecto creando un cuerpo especial que se denominaría cuerpo de gendarmería de Chaco y Formosa, compuesto de 800 plazas, proyecto firmado por los diputados José F. Uriburu, Faustino M. Lezica, Carlos Saavedra Lamas, Marcelo T. de Alvear y Lisandro de la Torre.

En 1919, el presidente Irigoyen envió un mensaje a esta Cámara propiciando la creación de un cuerpo de gendarmería, pero ya de carácter general y no como los anteriores destinados exclusivamente a la vigilancia de los territorios de Chaco y Formosa, sino para todo los del país. En dos de sus artículos se autorizaba al Poder Ejecutivo para crear con carácter permanente en cada uno de los territorios nacionales un regimiento de gendarmería compuesto de 300 plazas, con su oficialidad correspondiente, vale decir, se creaba un cuerpo compuesto de unas 3.000 plazas y su oficialidad correspondiente. Este proyecto no fué tratado, por lo cual no pudo convertirse en ley.

En el año 1923 el presidente, doctor Alvear, envió un mensaje también a esta Honorable Cámara propiciando la creación de una gendarmería nacional con un proyecto muy semejante, casi completamente igual al que en este momento tiene a su consideración la Honorable Cámara; el proyecto va firmado por el presidente doctor Alvear y su ministro del Interior doctor Matienzo. En 1926, siendo ministro del Interior nuestro colega y compañero de sector el doctor Tamborini, envía el Poder Ejecutivo un mensaje a esta Honorable Cámara insistiendo sobre la creación de la gendarmería nacional y abundando en razones para justificar su creación. El proyecto del presidente Alvear pasó a la Comisión de Guerra y Marina y fué despachado favorablemente con la firma de los diputados Jorge Ferri, Alberto Moreno, Alfredo Rodríguez, Juan Torrent, Cipriano Marcó, Alcides López, A. Echegaray Frías y Tomás Zurueta. No se obtuvo la sanción legislativa, y frecuentemente fueron produciéndose después en esta Cámara expresiones de deseos para que resurgieran los proyectos, hasta que en 1936 envía el Poder Ejecutivo un mensaje reproduciendo el proyecto que había sido presentado en 1926. La Comisión de Guerra y Marina estudió ese proyecto, y por el voto unánime de sus miembros aconsejó a la Honorable Cámara su aprobación.

La policía de los territorios nacionales se realizaba antiguamente en forma muy deficiente. Pudo tener visos de seguridad cuando se realizaba por intermedio de las tropas del ejército de línea, en aquella época en que la forma como estaba constituido nuestro viejo ejército le permitía realizar esas funciones policiales. Nuestro viejo y glorioso ejército estaba formado por hombres enganchados en su gran mayoría, que ingresaban al ejército a edad temprana y salían de él encanecidos, que estaban acostumbrados a esta especie de tareas, de tal manera que distraerlos a veces de sus funciones militares no significaba sacarlos de su actividad específica. La ley de servicio militar obligatorio modificó fundamentalmente esta situación, puesto que el ciudadano que llega a las filas del ejército va con un objeto determinado, prepararse para una posible acción en hechos bélicos y no pueden entonces ser distraídos de esa instrucción que debe realizarse en corto espacio de tiempo. Por eso precisamente desde aquellos momentos comenzó a intensificarse el propósito de establecer una policía organizada en los territorios nacionales.

La vigilancia que actualmente se realiza es

deficiente en grado sumo. Es de pública notoriedad que la vida y los intereses de sus habitantes está escasa o nulamente resguardada. Esto lo evidencian, por otra parte, numerosas notas que poseo de sociedades de fomento, de cámaras de comercio, de centros de diversa índole de los territorios nacionales, que claman por que se modifique la forma de custodiar la vida y los intereses de sus habitantes.

Pediré la inserción de la nómina de los mismos. (1) De ellos leeré algunos párrafos.

En una nota de la Sociedad de Fomento de los Territorios de Chaco y Formosa, se dice lo siguiente: «La crónica periodística refleja periódicamente la ininterrumpida sucesión de asesinatos, asaltos y robos de que son objeto en la zona agrícola los pobladores chaqueños y el extraordinario desarrollo alcanzado por el cuatreroismo que azota a los ganaderos, determinando un estado tal de zozobra que hace considerar a Chaco como la región menos segura del país. El constante aumento de la delincuencia, que es consecuencia de la incapacidad represiva de la policía, desprestigiada institución, que costando al erario nacional pesos 1.400.000 anuales, ha terminado por poner en evidencia su manifiesta incapacidad para contener la depredación de bandas armadas, que hasta han llegado a utilizar ametralladoras para la consumación de sus fechorías, deciden a esta asociación, que agrupa en su seno las instituciones comerciales e industriales más importantes de ambos territorios, a las municipalidades, comisiones de fomento, cooperativas agrícolas, etcétera, a solicitar que su excelencia el señor ministro obtenga del Parlamento la ley que le permita contar con 4 000 plazas extraordinarias, aproximadamente, en los cuadros de la gendarmería que custodiarán las extensiones que en la actualidad comprenden las gobernaciones nacionales.»

En otra nota, que clama también por medidas de vigilancia, en un párrafo muy gráfico se dice: «En Chaco y en los territorios, hoy se puede robar, secuestrar, asaltar y asesinar en la mayor impunidad».

Esto que se refiere a Chaco y Formosa, puede extenderse a los demás territorios. Es sabido que el cuatreroismo, sobre todo en las fronteras del Sur, se extiende. El año pasado, cuando debíamos tratar este asunto, llegó a mi conocimiento que habían pasado a Chile 42.000 cabezas de laneros sin que la policía hubiera

podido impedirlo, a pesar de la denuncia de los interesados.

El contrabando también tiene una importancia muy grande, sobre todo en la parte Norte del país vecina a Paraguay. Recordará la Honorable Cámara una serie de hechos delictuosos que obligaron a la policía a intervenir en forma violenta para evitar ese contrabando. La falta de una organización seria para vigilancia ha impedido —y la Honorable Cámara en muchas ocasiones ha tratado el asunto— realizar una intensa labor de nacionalización, como es general deseo. La situación se contempla, en este proyecto, pues junto a los puestos de vigilancia se instalan oficinas de Registro Civil que permitirán a los pobladores hacer asentar los nacimientos, matrimonios y defunciones en forma regular, sin obligarlos a trasladarse a países vecinos para realizar tales actos.

El actual proyecto —que como he dicho, es reproducción de otros presentados en 1923 y 1926— crea un cuerpo de gendarmería nacional con el carácter de policía militarizada federal, sin que esto importe considerarlo parte integrante del ejército de la Nación, del cual es independiente salvo en los casos expresamente determinados en este proyecto. Este artículo 1º coincide con los enunciados de la organización y servicio de gendarmería en Francia, en que se establece: «El cuerpo de gendarmería es una de las partes integrantes del ejército. Las disposiciones generales de las leyes militares le son aplicadas, salvo las modificaciones y las excepciones que su organización y la naturaleza mixta de ese servicio hace indispensables». El concepto es casi semejante al de nuestro proyecto.

Cuando se estudiaba en la comisión, se plantearon dos criterios: uno, que la policía debía tener carácter exclusivamente civil y, otro, que debía tener una organización terminantemente militar. Por un lado, algunos abogaban en favor del primer criterio diciendo que dándole carácter exclusivamente militar provocaría dificultades de toda naturaleza. Quienes propulaban la idea de que la policía fuera militarizada expresaban que la policía actual de los territorios es mala por su desorganización, por su indisciplina y porque los hombres que la forman no tienen las condiciones necesarias para desempeñar esos puestos, las que tampoco podían requerirse a hombres a quienes se retribuía tan pobremente; que para que esta organización fuese eficaz era conveniente que tuviera una disciplina férrea; que sus compo-

(1) Véase pág. 825.

nentes, diseminados por nuestro territorio, muchas veces alejados de los jefes, debiendo actuar con libertad y por propio albedrío, deben tener un concepto de su responsabilidad y de la seriedad de las funciones que desempeñan, lo cual se obtiene con la rigidez de una organización de carácter militar.

El proyecto de ley es, por tanto, un temperamento intermedio. Establece que esa organización dependerá del Ministerio del Interior, excepto en los casos expresamente determinados por esta ley. La gendarmería en todo lo relacionado con su función estará sometida a las leyes y reglamentos establecidos para el ejército, como asimismo a los reglamentos que el Poder Ejecutivo dicte para su servicio especial. En lo relativo a disciplina estará sometida al régimen del ejército y, en consecuencia, su personal se encontrará comprendido en lo prescripto por el Código de Justicia Militar. A estos fines dependerá del Ministerio de Guerra.

Sobre este particular quiero destacar un argumento del señor ministro del Interior que tuvo gran influencia en mí para que aceptara el temperamento que propicia este proyecto de crear una policía militarizada, pero dependiente del Ministerio del Interior. Dijo el señor ministro: «Crear un organismo que fuera exclusivamente militar bajo todos sus aspectos y todas sus realizaciones, y dependiente en consecuencia del Ministerio de Guerra, sería lo mismo que constituir una división del ejército que tendría que actuar para cumplir los objetivos de policía civil que el proyecto prevé. Esto traería como consecuencia convertir de hecho a los territorios nacionales en zonas o colonias militares, quedando virtualmente desvirtuada la organización política y administrativa de que actualmente gozan y alejándose cada día más la perspectiva, la legítima aspiración que tienen sus pobladores de ver esos territorios convertidos en provincias argentinas». Nosotros, que auspiciamos precisamente convertir en provincias a esos ricos territorios, como La Pampa y Chaco, que se hallan ya en condiciones de alcanzar esa transformación, no podemos dejar de valorar tales expresiones.

En su oportunidad en la comisión se expresaron opiniones a veces suspicaces sobre el alcance que esta ley podría tener en cuanto al empleo de esta gendarmería, porque en el artículo 5º se establece:

«El Poder Ejecutivo está facultado para poner bajo la dependencia directa y única del Ministerio de Guerra a la gendarmería o a parte de la misma, en los siguientes casos:

- «a) Estado de sitio;
- «b) Exigencias de la defensa nacional;
- «c) Movilización del ejército;
- «d) Cuando sea imprescindible para el mantenimiento del orden interno.»

Las objeciones que algunos miembros de la Comisión de Guerra y Marina formularon a este respecto, tuvieron la siguiente contestación del señor ministro, sobre todo con respecto a la expresión «cuando sea imprescindible para el mantenimiento del orden interno»: «Que aunque ello no signifique que permanentemente sucederá así, por lo menos —son expresiones de un representante del Poder Ejecutivo—, durante el período del gobierno actual, no se apartará de ellas». Dice el señor ministro: «Podría quizá pensarse, con un poco de suspicacia, que esta fuerza de policía en manos del Ministerio del Interior podría servir para otras cosas que para la vigilancia y seguridad. Pero si desgraciadamente en lo sucesivo hubiera algún gobierno, que desde luego puedo asegurar que no será el Poder Ejecutivo actual, que se desviara de sus normas administrativas y políticas y que tentara la aventura de querer utilizar estas fuerzas con fines de predominio electoral, saben bien los señores diputados que el Poder Ejecutivo de la Nación tiene sobrados recursos para hacer el bien o el mal y no necesitaría apelar a la gendarmería nacional para establecer un predominio.»

Yo creo que así sucederá y ésta también es una razón que al que habla y a los miembros de la Comisión de Guerra y Marina han inducido a pensar que no utilizará esta fuerza para otros fines que para los que la misma ley establece.

Sr. Ravignani. — Es muy importante.

Sr. Susan. — Dentro de la ley, perfectamente establecido, se determina que a una dirección general de gendarmería corresponderán tres inspecciones con cantidad de gendarmes y de personal más o menos semejante, una en el Norte, abarcando los territorios de Chaco, Formosa, Misiones y Los Andes, otra en el centro, comprendiendo a La Pampa, Neuquén y Río Negro, y una tercera al Sur, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se refiere la ley al personal, a sus grados, a la categoría de ellos y a la forma de reclutamiento, que establece que será formado por ciudadanos argentinos que hayan hecho el servicio militar, militares en actividad o retiro y ex empleados de policía. Se establece, también, la forma en que deberán efectuarse los ascen-

sos, en virtud de antigüedad y de méritos, formas de jubilaciones y pensiones, y como parte agregada a este proyecto, muy interesante, se legisla sobre la creación de colonias, «colonias del hogar» dice la ley. El artículo 46 establece que el Ministerio de Agricultura deberá poner a disposición del Ministerio del Interior y del de Guerra, según corresponda y a medida que éstos lo requieran, fracciones de tierra en los diversos territorios. De estas fracciones de tierra parte corresponderá a la gendarmería nacional y al Ministerio del Interior, parte al Ministerio de Guerra y parte al Ministerio de Instrucción Pública. También establece la ley que cada una de las fracciones de tierra indicadas en el artículo 46 servirá de base para la formación de una colonia del hogar, que será formada principalmente, como lo establece el articulado de la ley, por suboficiales y clases del ejército y de la armada, los ex clases, los ex conscriptos de los territorios nacionales y el personal de tropa de gendarmería que sean casados y los herederos forzosos de los miembros del ejército y de la armada, quienes tendrán derecho preferente a la concesión de los lotes, así como a la elección de los mismos y para los fines establecidos en el artículo 14 de la ley número 10.284.

Hay una disposición transitoria que es importante, que establece «que el Ministerio de Guerra organizará la gendarmería nacional y entregará al Ministerio del Interior totalmente organizado antes de los tres años de entrar en vigor la presente ley». Vale decir, que se presupone que en esos tres años primeros de organización, el Ministerio de Guerra por medio de los hombres que destine a ese objeto, militares en retiro o en actividad, imprimirá un sello determinado de disciplina a esta organización que es lo que se busca: una organización disciplinada, seria y eficaz para la defensa de los intereses de los pobladores de esos territorios.

Quiero referirme a los gastos que demandará el proyecto.

Dejando de lado lo que se refiere a gastos de iniciación, se asigna un presupuesto anual de 8.254.368, para un cuerpo que constará de 3.000 gendarmes y cerca de 600 personas más entre oficiales y suboficiales; presupuesto que en relación al presupuesto general de gastos de la Nación significará el 0,7 por ciento moneda nacional. Tengo a la vista un presupuesto de gastos de la gendarmería militarizada de Canadá que tiene funciones más o menos análogas; según el presupuesto de 1925 constaba de cerca de 3.000 individuos entre oficiales,

suboficiales y agentes y costaba 5.744.000 dólares canadienses, o sea alrededor de 22 millones de pesos argentinos, insumiendo más o menos el 1½ % de los recursos de Canadá.

El Cuerpo de Carabineros, de Chile que es una organización conocida, seria, militarizada —como las organizaciones similares de Francia que dependen de los ministerios de Justicia, de Colonias, del Interior y de Guerra— también depende del Ministerio de Guerra y está al servicio de los gobernadores de provincia y de municipios a los fines de policía, pero, como digo, su organización militar es tan seria que tiene en la actualidad como director a un ex jefe del estado mayor chileno. Este cuerpo de carabineros chilenos consta de 857 jefes y oficiales, 15.554 hombres de tropa y asimilados y personal civil, 1.861; total, 17.715.

Es un ejército permanente, como me dice el señor diputado Ravignani y sus sueldos varían desde el de jefe con 3.500 pesos chilenos mensuales a las categorías inferiores que oscilan de 400 a 200 pesos. De manera, que el presupuesto debe ser realmente elevado e insumir más del 5 % de las rentas chilenas.

El Cuerpo de Carabineros Reales, de Italia tiene una misión similar a la que se proyecta y consta de 45.000 plazas, vale decir, que en esta organización que proyectamos se han presupuesto cantidades que no son tan elevadas como pudiera creerse. La policía real montada de Canadá tenía presupuesto en el año 1935 cerca de dos pesos *per capita* para gastos, mientras que en la nuestra no pasará de esa suma.

De acuerdo con lo expuesto al comienzo, he querido ser breve porque es un proyecto que está debatido ampliamente por la prensa y los señores diputados lo conocen porque ha estado sobre la mesa en otras ocasiones. He tratado de insistir sobre algunos aspectos del problema para que él fuera conocido y disipar algunas dudas y objeciones que se pudieran haber formulado. Pero creo, y lo expreso con toda sinceridad, que la aprobación de este proyecto dará un instrumento serio de organización policial a los territorios, contribuirá a su tranquilidad y sobre todo a la tendencia de argentinizarlos, que se viene expresando a cada momento. Habremos hecho así obra práctica de gobierno y obra de argentinización.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Osorio. — Pido la palabra, para hacer una moción de orden.

Pediría que la Honorable Cámara resuelva, después que haga uso de la palabra el señor

diputado que lo ha solicitado, pasar a cuarto intermedio hasta mañana a fin de continuar considerando este asunto.

Sr. Repetto. — ¿Los señores ministros se han retirado de la casa?

Sr. Presidente (Kaiser). — El señor ministro del Interior, que esperó hasta las 19, se retiró a esa hora y no ha sido posible prevenirle que se iba a iniciar la discusión de este asunto.

Sr. Castex. — ¿Ninguno de los dos ministros está en la casa?

Sr. Presidente (Kaiser). — El señor ministro de Guerra se había retirado antes que el señor ministro del Interior.

Sr. Guglielmelli. — Esperaron tres horas los ministros.

Sr. Solana. — Voy a proponer que se levante la sesión.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar.

—Se llama para formar quórum:

—Después de unos momentos de espera:

Sr. Maino. — Pido la palabra.

Ya que todavía no hay quórum para votar las mociones formuladas, yo pediría a sus autores las retiraran por un momento para que entretanto el señor diputado Solari pudiera hacer uso de la palabra.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento general, tiene la palabra el señor diputado Solari.

Sr. Solari (J. A.). — Expondré, señor presidente, las razones que tenga para pronunciarme en contra del despacho de la Comisión de Guerra y Marina, sobre creación de la gendarmería nacional.

Considero que pocas veces esta Cámara ha debido estudiar una organización más complicada y, en ciertos aspectos, más confusa. No niego los buenos propósitos que se hayan tenido al proyectar la iniciativa, pero expreso mis dudas sobre la posibilidad de que ellos lleguen a materializarse con la aplicación de la ley que discutimos.

Para justificar esta creación se cita al Brasil, con su policía y unidades estatales: se habla de los carabineros chilenos; se nos trae el recuerdo de la Real Policía Montada de Canadá: inclusive se nos ofrece el ejemplo de algunas fuerzas de Francia. Pero yo declaro que ni en los términos del mensaje del Poder Ejecutivo ni en el informe que se produjo en el

Senado al considerarse este asunto, he encontrado argumentos valederos, de orden nacional, de tal naturaleza que lleguen a justificar una organización como ésta, que va a insumir, probablemente, de 15 a 20.000.000 de pesos.

La lectura de los antecedentes que he tenido a mi alcance, lo declaro ante la Cámara, ilustran poco sobre los fines, la necesidad y la eficacia que se atribuye a la ley por sus autores y sostenedores.

Se trata de una gendarmería nacional que tendrá fines de policía militarizada, pero no se sabe bien, a través del intrincado texto del proyecto, cuándo será realmente policía de estructura civil, para fines estrictamente policiales, y cuándo ha de ser un organismo militar, susceptible de ser estimado como una prolongación de nuestro ejército regular o como una nueva fuerza armada suplementaria.

Tengo la impresión de que se ha preparado un esqueleto legal lleno de resortes y que resultará muy difícil saber a ciencia cierta con cuántas cabezas y con cuántos brazos va a contar este organismo. Es una creación que yo llamaría policéfal y polibraquilia, con una base tan dilatada y tan múltiple que, por momentos, la hace fenomenal.

Llega a confundirse en la ley la presunta finalidad policial con objetivos típicamente militares, y a todo eso se lo adorna con proyecciones colonizadoras. Me parece que la imaginación oficial ha marcado en este asunto un verdadero récord. Lejos de proponer lisa y llanamente una enérgica reorganización policial en los territorios, con una policía centralizada, seleccionada, con unidad de acción y funciones delimitadas, se ofrece todo un rompecabezas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º, ingeniero Juan F. Morrogh Bernard.

No desearía aparecer ante el juicio de mis colegas como un hombre dado a caer en exageraciones o incomprensivo. Me hago cargo de que no hablo a título personal sino en representación de un sector de esta Cámara que ha demostrado en su tarea parlamentaria un alto espíritu de colaboración y que, en materia de territorios nacionales, tiene acreditada una labor que puede considerarse ejemplar por lo fecunda, constructiva y desinteresada. Pero necesito hacer un ligero análisis de la letra del despacho para probar que no hay exageración en mis asertos.

Por de pronto, llama la atención al menos perspicaz, que un asunto de esta naturaleza, con visos de mera vigilancia policial, llegue al Congreso, vía Senado —que parece ser la más expedita—, con un mensaje y proyecto de ley del Ministerio de Guerra, que sea considerado por la Comisión de Guerra y Marina y que no tenga en la dilucidación de una cuestión de esta magnitud la menor ingerencia la Comisión de Territorios Nacionales, a la que incumben los asuntos concernientes a esa enorme extensión de tierra argentina a la que ahora, con esta ley, iríamos a proteger y resguardar de los peligros presentes y futuros.

La gendarmería depende, según el artículo 4º, del Ministerio del Interior, pero según el artículo 61 del despacho, el Ministerio de Guerra organizará la gendarmería y la entregará antes de los tres años al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior aparece así como responsable de la criatura, pero se la van a entregar ya crecida y posiblemente con algunas mañas.

Sr. Labayen. — Qué mala opinión tiene el señor diputado del Ministerio de Guerra.

Sr. Solari (J. A.). — No, señor diputado, pero es que yo sé que en la ejecución de toda ley en que, como ésta, se van a designar 3.680 empleados, entre superiores y agentes, todo peligro es probable. No abro opinión sobre la capacidad técnica del Ministerio de Guerra ni sobre la eficiencia con que pueda intervenir en la elaboración y en la aplicación de la ley. No deseo ir más allá de donde yo mismo quiero, en la expresión de mi pensamiento.

Sr. Labayen. — He comprendido que el señor diputado se refiere a la orientación y no a otra cosa.

Sr. Solari (J. A.). — El Poder Ejecutivo, no obstante depender la gendarmería futura del Ministerio del Interior, está facultado para ponerla bajo la dependencia directa y única del Ministerio de Guerra en los casos de estado de sitio; exigencias de la defensa nacional; movilización del ejército y cuando sea imprescindible para el mantenimiento del orden interno. No sé si éstas no son, en última instancia, funciones específicas de todo ejército regular.

Puede, también, intervenir en cualquier parte de la Nación, siempre que sean requeridas sus fuerzas para auxiliar a las autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. Yo tampoco sé en qué medida esto puede rozar nuestro decantado federalismo, que yo no veo aparecer sino cuando se trata de extender los

beneficios de la legislación del trabajo a las provincias argentinas.

Sr. Videla Dorna. — Si me permite le voy a explicar un caso concreto.

Suponga el señor diputado un lugar extremo de una provincia colindante con un territorio nacional y un señor gobernador de esa provincia que en un caso urgente necesite un auxilio por algún delito que se haya cometido y que no posea en las proximidades de ese lugar fuerzas de policía propias y que recurra a solicitar la colaboración de la gendarmería del territorio, que posea un puesto avanzado cercano al lugar de la provincia donde se ha cometido ese delito. En este caso, y a solicitud del gobernador, la gendarmería interviene.

Sr. Solari (J. A.). — No he descartado el caso concreto, pero es que la ley dice en cualquier parte de la Nación.

Sr. Videla Dorna. — No representa ningún peligro.

Sr. Solari (J. A.). — La ley no dice en las zonas limítrofes sino en cualquier parte del territorio de la Nación y la provincia de Córdoba, por ejemplo, está en la República Argentina.

Sr. Videla Dorna. — No, señor diputado, tendrá asiento en los territorios y no tiene nada que ver la provincia de Córdoba.

Sr. Solari (J. A.). — Según el artículo 7º, que a mi juicio ofrecí gravedad digna de ser señalada, en todo lo que se relacione con su instrucción, el personal estará sometido a las leyes y reglamentos establecidos para el ejército, como asimismo a los de carácter especial que pueda dictar el Poder Ejecutivo. En lo relativo a la disciplina estará sometido al régimen del ejército, y, en consecuencia, su personal se encontrará comprendido en lo prescripto para los militares en el Código de Justicia Militar. A estos fines, dependerá del Ministerio de Guerra.

Es decir que se establece, para personas que no son militares, un fuero y una jurisdicción militar, y se establece también una doble jurisdicción para el caso de oficiales del ejército, porque además de estar sometidos al Ministerio del Interior a los efectos de las cesantías, pueden ser sometidos después a un tribunal militar.

Este fuero militar, esta jurisdicción militar, ya mereció una opinión adversa de un hombre tan sesudo y esclarecido como el ex ministro del Interior doctor Indalecio Gómez, quien en la primera conferencia de gobernadores realizada en Buenos Aires en 1913, al escuchar

alguna opinión en el sentido de la conveniencia de imponer una disciplina militar a las policías de los territorios nacionales, decía: «Me parece que la experiencia no nos ha demostrado la necesidad, ni para mantener esa disciplina, ni para la mayor eficacia de la acción de esa policía, de que se la invista del fuero militar. Creo que no hay por qué introducir una innovación en este sentido».

Me permito llamar la atención de los juristas y de los hombres de derecho que se sientan en esta Cámara sobre la gravedad de este artículo 7º.

Sr. Saccone. — No lo votaremos.

Sr. Solari (J. A.). — A título de hombre que lee con los ojos bien abiertos y sin prevenciones de ninguna naturaleza, me permito señalar los peligros que este artículo puede entrañar.

En esta contextura tan original que se da a la institución, que aparece dependiendo del Ministerio del Interior sin perjuicio de que en la ley se haga coincidir la acción de varios ministerios, el artículo 10 va más allá porque lleva su acción a los ministerios de Marina y de Hacienda, pues dice: «El Poder Ejecutivo queda autorizado para incorporar a la gendarmería nacional el personal de policía marítima, guardiacárceles, o parte de los mismos así como el personal de aduana que ejerza sus funciones dentro de la jurisdicción de las inspecciones determinadas por el artículo 14». Son las inspecciones a que ha hecho referencia el miembro informante de la comisión al hablar de este asunto.

Otra vez aparecen actuando en común los ministerios del Interior y de Guerra en la última parte del artículo 15 cuando dice que «las inspecciones administrativas se efectuarán por personal del Ministerio de Guerra conjuntamente con personal técnico del Ministerio del Interior». Cuando dice «personal técnico» no me explico bien qué alcance tiene, si es técnico en policía, técnico en contaduría...

Sr. Videla Dorna. — En el aspecto administrativo.

Sr. Solari (J. A.). — En el aspecto administrativo. Muy bien. Quiere decir que es exclusivamente a los fines de saber cómo anda la contabilidad de la gendarmería.

Sr. Videla Dorna. — Desde luego, porque el presupuesto va a incidir sobre el Ministerio del Interior.

Sr. Solari (J. A.). — En cuanto al nombramiento del personal, no creo que las cosas anden mejor.

Ya he dicho que por el artículo 24 se dispone que el nombramiento de los clases será efectuado por el Ministerio del Interior; pero si bien el artículo 28 establece que la destitución de los oficiales se impondrá en las formas y con los requisitos establecidos para la destitución de los empleados de la administración pública nacional, dispone a continuación que «si se diera de baja a oficiales del ejército, el expediente respectivo será pasado, una vez decretada la destitución, al Ministerio de Guerra, y el causante sometido al tribunal de honor correspondiente».

Doble tribunal, doble jurisdicción y no sé si doble pena.

Sr. Saccone. — Eso es inconstitucional.

Sr. Videla Dorna. — Ya se le explicará al señor diputado todo eso.

Sr. Solari (J. A.). — Estoy siempre dispuesto a recibir todas las explicaciones ilustrativas y, cuando me las prometen, descanso tranquilo.

Sr. Videla Dorna. — No le quepa la menor duda de que así será.

Sr. Solari (J. A.). — Estoy seguro.

Por el artículo 46 entra en escena otro ministerio, el de Agricultura, que deberá poner a disposición de los de Guerra e Interior las fracciones de tierras fiscales que requieran, tierras que mensurará y amojonará, y de las que hará levantar planos el Ministerio de Guerra, corriendo con todos los gastos los ministerios del Interior, Guerra o Instrucción Pública según el destino que se dé a las tierras.

Este proyecto que, como he dicho, se quiere adornar con cierta finalidad colonizadora, exhumó la ley número 10.284, que instituyó en 1917 el *homestead*, o ley del hogar, generosa iniciativa que nunca llegó a cumplirse y que hasta tengo mis dudas sobre si llegó a ser reglamentada.

Según el proyecto se dispone que el personal casado tendrá derecho a la concesión de un lote de hogar; los directores y los oficiales lo mismo. Se advierte que «ni los inspectores, ni los oficiales de gendarmería podrán arrendar o comprar propiedades inmuebles, excepto los destinados a habitación en los territorios nacionales, durante su servicio, ni negociar directa ni indirectamente en ganado o en productos de la tierra que no sean productos de sus propios lotes de hogar.» Me parece una medida preventiva altamente moralizadora, pero creo que será difícil fiscalizar su cumplimiento.

Hay más colonización: se autoriza al Ministerio de Guerra a arrendar las fracciones de tierra asignadas al mismo, en lotes no mayores de 5.000 hectáreas, con la condición expresa de que las mejoras introducidas, así como una parte de la hacienda, quedarán en beneficio del Estado. Igual autorización se concede al Ministerio del Interior. Esto es lo que consignan los artículos 55 y 56.

Me parece que se acuerdan a los ministerios de Guerra y de Marina funciones que les son extrañas y cuyo uso no podemos calcular, no por incapacidad de quienes estén al frente de esos ministerios, sino porque no les incumbe entrar a arrendar tierras fiscales y tratar de explotarlas en beneficio del Estado. Por otra parte, no creo que la tierra que tenga bajo su explotación el Ministerio de Guerra actualmente, sea, desde el punto de vista de su productividad, un brillante negocio.

—El señor diputado Biancofiore pronuncia algunas palabras que no alcanzan a percibirse.

Paso por alto otros artículos. Lo que deseo es destacar cuán confusa es la contextura de esta ley, que realmente autoriza a pensar que ha sido un poco improvisada.

El artículo 51 habla de que los suboficiales y clases del ejército y de la armada, los ex clases, los ex conscriptos de los territorios nacionales y el personal de tropa de gendarmería que sean casados, y los herederos forzosos de los miembros del ejército y armada que soliciten lotes en las colonias del hogar, tendrán derecho preferente a su concesión, así como a la elección de los mismos. Es decir, la prerrogativa rige no solamente para los que integran esta gendarmería, sino para los miembros del ejército y de la armada, los suboficiales y clases, los ex conscriptos. No sé si este criterio pudo haber tenido algún éxito en 1840, pero me parece que en la actualidad no es el que más convenga y se ajuste a la realidad.

En el deseo de que los señores diputados comprendan que no nos guía una crítica negativa, citaré una opinión de «La Prensa», que se ha manifestado en favor del proyecto, pero que ha señalado algunas deficiencias que ya hemos apuntado. En el diario del 14 de agosto de 1936 comenta la creación de la gendarmería nacional en un editorial que si bien data de hace dos años, mantiene su actualidad, porque en estos últimos días el mismo diario se ocupa del tema e insiste en los reparos que entonces opuso a la sanción de esta ley. «Entre los prin-

cipales defectos del proyecto de ley presentado, resalta —dice— el carácter totalmente híbrido de la gendarmería que se creará y de su funcionamiento, carácter que si se mantuviese algún tiempo habría de provocar más de un incidente desagradable, restando prestigio y eficacia al nuevo organismo. El mensaje está firmado por el ministro de Guerra, no obstante tratarse de la creación de una entidad que dependerá del Ministerio del Interior. A pesar de esta dependencia, el ministro de Guerra tendría un intervención directa en todo lo que es disciplina, instrucción y comando, y los ministros de Hacienda y de Justicia la tendrían en la misma forma acerca de todo lo que se refiere a servicios especiales. Esta cuádruple dependencia traerá confusión y exceso de mandato.»

El artículo 17 establece «que el personal de la gendarmería nacional no tendrá estado militar, no obstante lo cual el artículo 8º lo somete al Código de Justicia Militar, bajo la dependencia del Ministerio de Guerra. Quiere decir que una persona que no será militar podría, bajo las órdenes de una autoridad civil del Ministerio del Interior, cometer una falta o un delito que sería juzgado por funcionarios del Ministerio de Guerra con la aplicación del Código de Justicia Militar. Es un contrasentido inaceptable, y sería preferible dictar un reglamento especial para las funciones de la gendarmería, independientemente del citado código. La gendarmería, en la forma propuesta recibiría el nombre de gendarmería nacional, a pesar de que no tendría jurisdicción alguna dentro de los límites de las provincias, desde la de Mendoza hasta Salta, ni en las de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, creando así una diferencia esencial que no dejaría de ser aprovechada por contrabandistas y aventureros en perjuicio de las provincias mismas.»

Sr. Allperín. — ¿Es el editorial del 14 de agosto de 1936?

¿Sería tan amable de leer cómo termina? Si no, lo haría yo.

Sr. Solari (J. A.). — He expresado, perdóneme el señor diputado, que «La Prensa» se ha manifestado reiteradamente partidaria de la gendarmería nacional y no obstante eso y para abonar mi propio juicio necesitaba leer la opinión de un diario de la importancia y seriedad de «La Prensa» para que se viera que la crítica que hemos formulado no era ni caprichosa ni inconsulta.

Lo que dice el editorial, al final, lo voy a leer con mucho gusto, para complacer al señor diputado. Dice: «Pero estos puntos, a pesar

de su importancia, son detalles que fácilmente pueden subsanarse en las comisiones parlamentarias que estudiarán el proyecto. Por esto, al requerir la pronta sanción de la ley creadora de aquel cuerpo, esperamos que el estudio sereno del asunto podrá traer la solución más conveniente para los intereses generales del país y particulares de las gobernaciones».

Sr. Allperín. — Perdóneme el señor diputado. Al terminar el editorial del 14 de agosto de 1936, dice que «Es indispensable la inmediata creación de esa gendarmería, la que a pesar de las deficiencias de que pueda padecer, constituiría la iniciación de una obra de utilidad, cuyos errores e inconvenientes será posible corregir a medida...»

Sr. Solari (J. A.). — No creo que haya una edición especial de «La Prensa» para el señor diputado. (*Risas.*)

Sr. Allperín. — No es con chistes...

Sr. Solari (J. A.). — He leído el final del artículo del 14 de agosto de 1936. Será otro artículo de ese día o de otro el que lee el señor diputado.

Sr. Allperín. — No es con chistes cómo debe tratarse este asunto.

Sr. Solari (J. A.). — Es que el señor diputado quizás se refiere a un artículo reciente, de ayer.

Sr. Allperín. — Le pregunté al señor diputado si se refería al editorial del 14 de agosto de 1936. El diputado me dijo que lo era, y el artículo contiene al final los términos que he leído. Por eso me he permitido esa interrupción.

Sr. Solari (J. A.). — Creo que padece un error el señor diputado. He leído ese artículo. El otro no lo he traído porque no interesaba a mi fin, pero tengo presente que se ha publicado ayer o anteayer y que termina en la forma que ha leído el señor diputado.

Sr. Allperín. — No, señor. El artículo del 14 de agosto de 1936 de «La Prensa»...

Sr. Presidente (Morrogh Bernard). — Para mejor aclaración se podrían insertar en el Diario de Sesiones.

Sr. Solari (J. A.). — No tengo inconveniente en que se inserte.

Sr. Allperín. — Que se inserte. Es un artículo publicado en «La Prensa».

Sr. Solari (J. A.). — Lamento que no se haya seguido el prudente consejo de este diario y que la Comisión de Guerra y Marina en mayoría haya optado por el camino tal vez más fácil para el éxito de la ley. No voy a hacer cargos ni a criticar a los miembros de la comisión. Ha optado por despachar el proyecto tal como ve-

nía en revisión. No ha tenido en cuenta el consejo de «La Prensa», en el sentido de introducir las mejoras y enmiendas que tal vez habrían amenguado los defectos.

Sr. Videla Dorna. — No ha optado. Ha estudiado seriamente el proyecto. Desde luego ha considerado, también, la urgencia en sancionarlo una vez por todas. Pero lo ha estudiado serenamente con la presencia de los señores ministros.

Sr. Solari (J. A.). — No lo dudo.

Sr. Susan. — Y se examinó detenidamente la cuestión de darle o no una organización militarizada. Lo sabe perfectamente el señor diputado.

Sr. Solari (J. A.). — No entro, señor presidente, a considerar en detalle esta nueva creación, cuyos caracteres esenciales, misión y organización trataré de analizar luego, en forma breve; pero considero indispensable hacerme cargo de algunos motivos expuestos para justificar la gendarmería.

El Poder Ejecutivo ha tomado como base un proyecto de 1923, reproducido en 1926 y 1928. Dejo de lado las viejas iniciativas, algunas de las cuales creo que se remontan al año 1877 y cuyo recuerdo ha refrescado con tanta oportunidad el señor miembro informante.

Al remitir el proyecto de 1936, el mensaje expresaba lo siguiente: «La vida, el comercio y la producción hacen indispensable la existencia de este órgano de seguridad en los territorios nacionales, pues no es posible atender y vigilar sus grandes extensiones con las actuales policías de las poblaciones, cuya acción se ve limitada a las pequeñas regiones circundantes a las mismas, sin poder atender los parajes alejados que son las zonas de convergencia del elemento maleante.» El señor miembro informante del Senado hizo mérito de las mismas razones expuestas en el mensaje del Poder Ejecutivo y agregó como argumento decisivo dos o tres párrafos de una nota elevada por una asociación de fomento del Chaco y Formosa, según la cual faltan en esos territorios garantías, y peligran la vida y las haciendas de los pobladores.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, doctor Juan Vilgré La Madrid.

Digo, desde ahora, que si se trata de establecer una vigilancia más rigurosa, de crear en los territorios un órgano de seguridad, no se explica que sea el Ministerio de Guerra quien indique el camino, cuando es el del Interior el que tiene a su cargo el gobierno y administración

de los territorios. Desearía saber qué opiniones se han consultado, si se ha pensado en la superposición de funciones que podrá existir entre las policías y la gendarmería. Me agradaría conocer el juicio que esta creación merece a los gobernadores de los territorios. No conviene caer en innovaciones costosas y de resultados discutibles, ni en la crónica de situaciones espeluznantes para abonar una ley y para tratar de cohonestar, con creaciones un tanto fantásticas, lo que no se hizo, lo que no se supo o no se quiso hacer como obra permanente y metódica de gobierno en los territorios nacionales.

Dígame con toda claridad: queremos aumentar los efectivos del ejército con destino a los territorios o a algunas regiones de los mismos, o queremos contar con fuerzas eficientes, disciplinadas y responsables de policía, y entonces el problema podrá enfocarse también claramente, buscar soluciones acertadas sin ofrecer toda una gran creación cuya hibridez conspira contra su propio éxito y puede ser origen de conflictos y perturbaciones de todo orden. Y no se recarguen las tintas, señores diputados, respecto a la policía de los territorios y a la vida de esas regiones argentinas.

Las muchas y muy serias fallas que se pueden imputar a la policía, yo digo que no le corresponden exclusivamente. Ha faltado un criterio orgánico de gobierno, una preocupación celosa y constante por atender las necesidades de esas regiones, por proveerlas de elementos, por seleccionar el personal policial, cuidando su prestigio y su responsabilidad.

No he querido, aunque tengo de casi todos los territorios cierto conocimiento, no he deseado improvisar. He recogido informaciones en fuentes oficiales, he hablado con viejos pobladores de distintos territorios, he leído y revisado las memorias de los gobernadores, y afirmo que no surge de todo ese caudal de información que he tenido a mi alcance, el estado que tratan de reflejar algunos discursos y los que pretenden traducir ciertos argumentos respecto de las policías, que amenazarían la convivencia social en las gobernaciones argentinas, respecto del aumento pavoroso de la delincuencia y de la existencia de condiciones generales de ambiente, de costumbres, que hacen pensar en los cuadros más horrendos del Far West. Yo creo, señores diputados, que con excepción de alguna gobernación —y cito especialmente la del Chaco, donde las cosas del punto de vista de la dirección central no marchan del todo bien—, que en general, se puede observar una rectificación saludable en la con-

ducta de los funcionarios que tienen el gobierno de esos territorios y que en materia policial, como consecuencia de las críticas formuladas desde las bancas de este sector, como consecuencia, también, de un ligero aumento de los efectivos policiales y de las exigencias de la misma población, esos servicios han ido mejorando en forma discretamente apreciable.

Quiero hacer, señor presidente, en esta oportunidad, una preferencia a la labor cumplida por los delegados de la Comisión de Territorios Nacionales de la Honorable Cámara, que visitaron numerosos territorios del Sur durante los meses de enero a marzo de 1937. Me refiero al señor diputado Solana y a mi estimado compañero y amigo el ex diputado Demetrio Buirá. Ellos produjeron un informe que ha sido impreso, que los señores diputados que se interesan por los territorios nacionales pueden y deben leer; y esta tarea, si se quiere silenciosa y un tanto anónima de estos dos representantes del pueblo, traduce, a la vez que la preocupación de la Cámara que los delegó para que visitaran esos territorios, la patriótica preocupación de ellos por servir los intereses efectivos de esa población.

Este informe ofrece una visión de conjunto de las necesidades efectivas de los territorios argentinos. Ofrece también soluciones, señala y apunta algunas críticas fundadas, y no está inspirada en propósitos políticos del momento, ni se guía tampoco por el deseo de elaborar grandes y onerosos planes que de anticipado se sabe que no se realizarán. Estudia la realidad de la situación de los territorios con criterio objetivo, realista y fecundo. Los autores de este informe han aportado su colaboración, que la Cámara y el Poder Ejecutivo deben tomar en cuenta informándose de los proyectos que ellos sometieron a la consideración de este cuerpo y, sobre todo, de los fundamentos y puntos de vista que exponen para el estudio de algunos de los más importantes problemas de las gobernaciones.

Con respecto a la policía, ellos dicen lo siguiente, como conclusión: «Por las razones y antecedentes expuestos, opinamos que es urgente dotar a las gobernaciones de los recursos necesarios para que la organización policial cuente con el número suficiente de personal convenientemente remunerado, con locales y elementos apropiados».

No aparece al través de las 32 páginas de este folleto, el *film* escalofriante que en algunos periódicos mal informados y en algunos sectores, se pretende exhibir a cada instante con respecto

a los territorios nacionales. En este caso, se trata de la palabra autorizada de hombres que han conocido *in situ* la realidad misma, y que han seguido de cerca sus problemas.

Sr. Allperín. — El señor diputado termina de hacer referencia a sectores de la Cámara cuyo juicio estaría en contraposición de lo que dice el señor diputado. Convendría individualizar esos sectores.

Sr. Solari. (J. A.). — No me he referido a sectores de la Cámara sino de la opinión. Si las interrupciones del señor diputado me ha de costar tanto entenderlas, francamente le ruego no las haga.

Sr. Allperín. — El señor diputado es agresivo sin necesidad.

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid).—Ruego al señor diputado no interrumpa.

Sr. Allperín. — Hace muy mal el señor diputado en seguir en esa forma.

Sr. Biancofiore. — El señor Nicholson, inspector del Ministerio de Agricultura, hace veinte años habló de lo mismo a que se refiere el señor diputado.

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid). — Llamo la atención de los señores diputados respecto de la conveniencia de respetar al orador en el uso de la palabra.

Sr. Solari (J. A.). — Tengo los fragmentos pertinentes de las memorias de los gobernadores de aquellos territorios, que traducen la necesidad de reforzar el personal policial, dotarlo de los elementos indispensables y aumentar sus recursos. En ninguna parte, excepción hecha de la memoria del gobernador de Misiones, aparece la menor referencia a gendarmería y, lejos de surgir de estos documentos la impresión de que la delincuencia aumentara, uno recoge la impresión contraria. En Río Negro, por ejemplo, el total de los delitos que fué en 1932 de 1.873, en el año 1933 disminuye a 1.653. En Tierra del Fuego, el gobernador dice: «Pese al medio ambiente la acción policial se ha desarrollado dentro de la más encomiable corrección y no es de extrañar que los penados del presidio local al terminar su condena y quedar en libertad elijan la casa policial como refugio seguro que los pone a cubierto contra la suspicacia popular que atribuye a los ex penados los hechos delictuosos, lo cual —justo es decirlo— carece de fundamento». Y el gobernador de Tierra del Fuego, después de hacer notar que la policía, por ausencia de representantes locales de varias reparticiones nacionales, debe substituirlos, hace una consideración muy in-

terezante que quiero recordar, en esa su memoria de 1934, elevada en junio 17 de 1935.

Con respecto a sueldos de la policía, aspecto que habrá que tener en cuenta, dice: «No es posible exigir honestidad al personal cuando ésta debe ser a costa de las necesidades del mismo y es de ahí el empeño del que suscribe para que el personal de la policía y gobernación gocen de todas aquellas franquicias que permiten las leyes y reglamentaciones, a fin de que éstos tengan la máxima comodidad. Hoy, señor ministro, los sueldos de la policía y de la gobernación, son sueldos de hambre, pues con \$ 312 m/n. que cobra un comisario no es posible vivir decorosamente en sitios donde el pan vale 0,50 el kilo, la botella de cerveza \$ 1 m/n., y un ovillo de hilo, que en Buenos Aires vale 0,30 aquí cuesta \$ 1,50 m/n. En ésta el personal de policía no tiene casa ni tiene ningún halago; debe vivir en sitios donde la vida es difícil y penosa. Cuando uno observa los sueldos y prebendas de que goza el personal de policía de la Capital Federal, donde dispone de los halagos de la vida moderna, salta a la vista la gran injusticia.

«De nada sirve castigar —agrega—; de nada relevar comisarios, de nada hablar de patriotismo y cumplimiento del deber, si esa faz de la vida del empleado policial no se contempla, y sólo cuando ésta esté resuelta, será el momento de exigir honestidad y competencia en el cumplimiento de sus obligaciones y terminar con la mala fama de que goza la policía de los territorios. Pese a todas estas consideraciones, la policía de ésta posee merecida fama de honesta y ello se debe a la clase de personal que tiene, y al afán de la gobernación de favorecer las necesidades de los mismos en la esperanza de una futura mejora.»

El gobernador de Los Andes expresa...

Sr. Saccone. — El que firma esa nota es el contraalmirante Moneta?

Sr. Solari (J. A.). — Era el capitán de navío retirado, señor Siches. El señor Moneta es el actual gobernador.

El gobernador de Los Andes expresa una opinión coincidente. El de Chaco aparece informando al país con respecto a la disminución de la delincuencia o por lo menos trata de demostrar, a través del informe publicado el 17 de enero de este año, por el jefe de policía de ese territorio, que la delincuencia no es mayor en el Chaco que en otras partes, y hace una serie de consideraciones y acompaña estadísticas cuya lectura voy a omitir. Sin embargo, el gobernador del territorio, en abril

de este año hace notar que procede el aumento de la policía y establece que cuenta ahora con una insignificante fuerza: en 1925 tenía 725 hombres de tropa y hoy solamente 522.

Sr. Susan. — ¿Me permite el señor diputado?

Tengo a la vista una lista de veinticinco telegramas enviados por presidentes de comunas y de comisiones de fomento, que pido sean insertados en el Diario de Sesiones, y dicen lo contrario, en el sentido de que esa policía es deficiente en grado sumo y no garantiza la vida ni los intereses de los pobladores de los territorios.

Sr. Solari (J. A.). — Yo no he dicho que la policía de los territorios, y menos la de Chaco...

Sr. Susan. — Tengo una nota de la comisión de fomento...

Sr. Solari (J. A.). — ¿La misma, seguramente, que se leyó en el Senado como argumento para justificar una ley que importa un gasto de varios millones?

Sr. Susan. — Estas notas tienen para mí más importancia porque son de presidentes de comisiones de fomento, de Chaco y de Formosa.

Sr. Solari (J. A.). — No he expresado, en el curso de mi exposición, que la policía de los territorios sea la que los mismos merecen. He dicho que es insuficiente y que pueden señalarse serias y graves fallas en el cumplimiento de su deber. Podría decir mucho más; pero lo que no he podido recoger como impresión real de la mayoría de los pobladores de los territorios, es la urgencia de crear esta gendarmería, de establecer esta fuerza de 3.000 gendarmes y de más de 600 oficiales y personal en los diferentes territorios argentinos.

Recuerdo que en los congresos de municipalidades de los territorios nacionales realizados en el año 1933, y me parece que en 1936, en esta Capital, se consideraron, con la representación de delegados de todos los territorios, todos y cada uno de los problemas que interesan a los mismos; y a ningún delegado se le ocurrió señalar como solución, y menos como única solución, la creación de la gendarmería.

Que lleguen los telegramas que algunas comisiones de fomento envían para tratar de gravitar sobre la opinión de la Cámara, se explica porque hay un millón de opiniones diseminadas.

Sr. Susan. — ¡Es claro! Son de comunas electivas y son opiniones como las que el señor diputado ha recogido.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Qué comunas?

Sr. Susan. — De Charata y de otras.

Sr. Solari (J. A.). — Se quejan de la mala policía chaqueña...

Sr. Dickmann. — ¿Me permite el señor diputado?

El año pasado, la Comisión de Presupuesto visitó una extensa parte del territorio de Río Negro. El señor diputado Solari y el que habla hemos formado parte de esa excursión, hemos sido recibidos en muchas municipalidades y hemos visitado la policía de muchas localidades, y en ninguna parte ningún ciudadano, grupo o comisión nos ha significado la necesidad o urgencia de una defensa especial ni nos ha hablado de una criminalidad especial. En ninguna parte hemos oído tal cosa los veinte diputados de la comisión.

Y voy a agregar más. He visitado otros territorios nacionales y afirmo que he sentido en algunas partes de ellos más seguridad y tranquilidad que en algunas calles de la Capital Federal.

Sr. Videla Dorna. — Si hubieran preguntado les habrían contestado concretamente. Pero no preguntaron nada sobre esta cuestión.

Sr. Dickmann. — Se recibió toda clase de denuncias y de quejas y no hemos tenido que preguntar. Si hubiera un malestar en este sentido, lo habrían manifestado.

Sr. Allperín. — Al señor diputado por la Capital, que ha hecho ironía barata al referirse a una aseveración mía, debo decirle que tengo aquí el número de «La Prensa» del 14 de agosto de 1936 y en este editorial está el párrafo a que ha hecho referencia.

Sr. Solari (J. A.). — La Secretaría deberá cotejar los dos textos.

Sr. Videla Dorna. — Habrá dos ediciones de «La Prensa»; una, que leen los socialistas y otra, que leen los diputados de la derecha.

Sr. Ruggieri. — El señor diputado Solari tiene sobre su banca el recorte del diario «La Prensa» del 14 de agosto de 1936. Conviene dejar establecido que el recorte que ha traído el señor diputado Solari es rigurosamente auténtico.

Sr. Solari (J. A.). — Todas las citas que traigo son de una rigurosa y absoluta seriedad. Tengo en mis manos el recorte del editorial que «La Prensa» publicó el 14 de agosto de 1936 y que he recortado en su totalidad...

Sr. Ravignani. — Habrá que nombrar una comisión investigadora. (Risas.)

Sr. Osorio. — El asunto no tendría importancia si no fuera por la postura de suficiencia

del señor diputado frente a una rectificación que se le ha hecho desde este sector. La actitud despectiva del señor diputado para otro diputado a quien le debe respeto y consideración...

Sr. Solari (J. A.). — Está en un profundo error; no ha habido en mí ningún propósito despectivo.

Sr. Osorio. — Lo celebro; pero el gesto y la actitud del señor diputado eran despectivos.

Sr. Solari (J. A.). — No ha habido en mí ningún propósito despectivo para nadie y menos para el señor diputado por Buenos Aires, a quien lo sé preocupado por la suerte de los territorios, en alguno de los cuales ha tenido actuación; pero es evidente que valía la pena aclarar ese aspecto incidental del debate.

Sr. Allperín. — El informe me ha sido suministrado por la Biblioteca del Congreso, de donde procede el tomo que se me ha traído.

Sr. Ruggieri. — Sería conveniente que el señor diputado informara si en ese tomo y en la fecha indicada existe o no el editorial a que ha aludido el señor diputado Solari.

Sr. Allperín. — El tomo ya lo he devuelto, pero lo he pedido nuevamente para hacer la comprobación.

Sr. Solari (J. A.). — Mientras tanto, prosigo. En La Pampa ocurre lo mismo con respecto a la difusión de los delitos. Según la memoria del gobernador, correspondiente al ejercicio 1936 - 37, en 1936 el total de delitos era de 690, en 1934 era de 1.912, en 1935 de 634, en 1936 de 787, en 1937 de 694. De manera que se registra una disminución de los delitos en La Pampa.

El gobernador de Chubut expresa opiniones coincidentes con las que ya he recordado, y en una de sus memoria fechada en julio 1933, dice: «En otro orden de cosas la eficacia policial también reside en el número de las personas destinadas al servicio, y desde este punto de vista creo que el territorio de Chubut se encuentra en condiciones harto deficientes. En el término de un año le han sido substraídos por economías en el presupuesto general, 75 plazas de agentes, y conforme lo he hecho notar al señor ministro en un informe especial sobre la materia, se hace indispensable prever en alguna forma el aumento de 50 plazas de agentes que reputo imprescindible para poder esperar una discreta vigilancia en la enorme extensión de territorio confiada a la policía».

El gobernador de Misiones, en su memoria de 1936, expresa que «el problema creado por la escasez de personal de policía también exigió del subscrito una constante preocupación.

Con los aumentos de personal superior y subalterno obtenidos en enero y julio de 1936 y febrero del corriente año, la policía del territorio cuenta con 54 empleados de categoría superior y con 390 plazas. Este número todavía es escaso e insuficiente para las necesidades del territorio y para los servicios de diversa índole que debe atender. Sus funciones son en efecto, múltiples y complejas, razón que hace más sensible su escasez numérica».

Sr. Ruggieri. — Si me permite el señor diputado...

Conviene decir una palabra más sobre la incidencia producida entre el señor diputado por la Capital que hace uso de la palabra y el señor diputado por la provincia de Buenos Aires

Tengo sobre mi banca el tomo del diario «La Prensa», correspondiente al mes de agosto de 1936 y donde está, por consecuencia, la edición correspondiente al día 14 de dicho mes. En ese número de «La Prensa» no hay otro editorial que el que ha leído en parte el señor diputado por la Capital.

Sr. Allperín. — Y al que yo he hecho referencia...

Sr. Ruggieri. — Permítame el señor diputado...

Voy a hacer una aclaración que va a ser también satisfactoria para el señor diputado por Buenos Aires.

En la parte final de ese editorial no hay otro párrafo que el leído por el señor diputado Solari; pero en ese artículo —no en la parte final como había expresado el señor diputado por Buenos Aires...

Sr. Allperín. — De acuerdo a lo que me informó la Biblioteca del Congreso.

Sr. Ruggieri. — ... sino en la primera parte—, hay un párrafo que coincide con el que leyó el señor diputado que ha promovido la incidencia. Esto significa que no hay sino un solo editorial, que contiene en su parte final el párrafo leído por el señor diputado por la Capital, y el citado por el señor diputado por Buenos Aires, que figura, repito, en su primera parte.

El señor diputado ha incurrido en un error involuntario, debido a la información fragmentaria que le ha proporcionado la Biblioteca de la Cámara.

Con estas palabras queda aclarada la incidencia.

Sr. Allperín. — Por eso, era una lástima que gastara ironía el señor diputado Solari.

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Solari (J. A.). — En la memoria del gobernador de Misiones aparece su opinión sobre la gendarmería en ese territorio. En la página 7, expresa textualmente: «A pedido del Ministerio de Guerra, —del Ministerio de Guerra— el subscrito presentó en octubre último su proyecto relativo a la distribución que habría de darse en el territorio de Misiones a la gendarmería nacional, creada por proyecto de ley del Poder Ejecutivo y sometida por éste a consideración del Honorable Congreso nacional con mensaje del 8 de agosto. La organización de las fuerzas de la gendarmería tropezará indiscutiblemente con serias dificultades como consecuencia de la falta de comodidades para los efectivos, medios de comunicación permanentes y otras circunstancias que exigirán un estudio previo y meticuloso y un plan de acción previsor de todas las contingencias que ofrecerá la vida de agrupaciones militarizadas en zonas del territorio alejadas de los centros importantes de población».

Dejo de lado otras constancias de las memorias de los territorios restantes. No creo necesario, señor presidente, aclarar la opinión que tengo vertida respecto a la policía de los territorios. Yo sé que la policía actual puede y debe corregirse; debe ser seleccionada y tal vez en algunas regiones debe remunerarse mejor. Sé, también, que hay de parte de la mayoría de los gobernadores de territorios una dedicación preferente por este asunto y no puedo aceptar como un hecho indiscutible que se le atribuya a la policía defectos que no le son imputables exclusivamente o que se presente la situación de los territorios como reclamando urgentemente el envío y la organización de fuerzas de la importancia de las que se proyectan.

Sé que en la Capital Federal no hace muchos años la policía dejaba bastante que desear y cúmpleme declarar que fué, sobre todo como consecuencia de la implantación de un riguroso criterio selectivo en el personal, que la policía ha mejorado en la forma que todos podemos apreciar. Abusos policiales, extralimitaciones policiales, ocurren y se registran en todo el país, y en provincias cuya cultura media y cuya densidad de población, podrían hacer pensar que tales abusos y tales hechos no deberían ocurrir. No vale la pena tejer una novela ni presentar en la Cámara como zonas poco menos que a merced todavía del salvaje, regiones que son verdaderos emporios de trabajo y que en

muchos aspectos son efectivos centros de cultura y de civilización.

Yo me siento obligado, como diputado de la Nación, a levantar mi voz de aplauso, en cierto aspecto de reivindicación para los territorios nacionales.

Lo que pasa, señor presidente, es que ha faltado, por muchas razones, una directiva de gobierno que atendiera los problemas más urgentes de los territorios y, especialmente, el problema policial; y, a través de las cifras, esto aparece comprobado.

En 1936, el total del personal de tropa de la policía de los territorios era de 3.436 hombres, y, en 1938, que es el aumento que señalan todos los gobernadores, se llegó a 3.626, es decir, un aumento que no llega ni a 200 plazas en las diez gobernaciones. Y vale la pena tener presente, sobre todo vinculándolo al comentario que hacía el gobernador de Tierra del Fuego, que un sargento gana \$ 180 m/n. nominales, el cabo \$ 165 m/n., y el gendarme \$ 160 m/n., que en realidad no pasará de \$ 145 m/n., y como que se habla de la gendarmería chilena, conviene decir que allí los agentes reciben una gratificación según las zonas y las dificultades del terreno en que deben ejercer sus funciones, lo que se ha establecido por el decreto-ley del 28 de julio de 1932.

La población de los territorios, según datos de la memoria del Ministerio del Interior del 30 de abril de 1937, era en 1920 de 389.994 habitantes y, en 1936, se calcula aproximadamente en 927.776 habitantes. Duele tener que referirse a cálculos aproximados, en este país que por disposición constitucional debe levantar su censo general cada diez años. Estamos en ese, como en otros aspectos, con bastante retraso. Llevamos al día el censo agropecuario, sabemos cuántas cabezas de animales cuenta el país, pero hace ya 24 años que no sabemos exactamente cuántos somos, no obstante la disposición expresa y terminante de la Constitución.

Se ha casi triplicado la población de los territorios de acuerdo con las cifras que constan en las memorias del Ministerio del Interior, pero el aumento de las fuerzas policiales no ha guardado proporción. En la misma memoria del Ministerio del Interior de mayo de 1935 se hacen a este respecto, consideraciones que quiero recordar: «Hace 15 años —dice— con una población de 400.000 almas, había 4.000 gendarmes, lo que hace uno por cada 100 habitantes; hoy, en cambio, con 830.000 habitantes, más del doble, hay 3.200 gendarmes, una cuarta parte menos, y su proporción

es un agente por cada 260 pobladores. Si en lugar de reducirse la policía de los territorios, se hubiera mantenido el número de plazas subalternas en la proporción de uno por cada 100 habitantes, hoy debería haber 8.300 hombres de tropa en lugar de los 3.200 que hay». Actualmente, con 927.000 habitantes sólo hay 3.626 hombres de tropa, lo que da una proporción de 4 por cada 1.000 habitantes. Yo no entro a discriminar ahora cuántos son los que ejercen funciones efectivas o cuántos los que se deslizan como meritorios y no prestan realmente esas funciones; no sé cuántos pueden en determinadas gobernaciones servir fines no estrictamente policiales. Me atengo única y exclusivamente al texto de las estadísticas publicadas.

Pero señalo un aspecto importante de esta cuestión que muestra la negligencia o la falta de previsión de las autoridades encargadas del gobierno de los territorios. No desconozco que en algún momento razones de economía han obligado tal vez a no atender la solución de estos problemas. Pero el sueldo modesto de estos hombres que exponen su vida y que llevan una existencia riesgosa en regiones inhóspitas y a veces totalmente desiertas no es lo que puede gravitar en forma decisiva sobre las finanzas públicas, cuando nuestro generoso presupuesto y nuestras finanzas tan abiertas permiten construcciones fantásticas y la compra de muchos palacios.

Tengo en mis manos una carta de un poblador del Chubut, que conoce de cerca la vida policial; es una impresión directa que voy a leer, porque desearía que la Cámara se imaginara escuchar a este hombre que tiene motivos para estar informado y que nos va a referir cosas que tal vez resulten interesantes a los señores diputados.

«El aumento de sueldos a los funcionarios de la repartición —dice— sería algo justísimo. Voy a ponerle casos concretos del porqué de ello y también por qué hacen falta medios de movilidad. Hay una jurisdicción policial, Paso de Indios, que abarca 600 leguas cuadradas. El comisario encargado de esa dependencia, con un sueldo de 225 pesos líquidos mensuales, debe trasladarse de un punto a otro de su jurisdicción y, no teniendo automóvil propio ni del Estado, debe hacerlo a caballo. Un solo viaje que haga, que casi siempre es de muchísimos kilómetros, fuera de arruinarle el animal, le significa grandes erogaciones. Forzosamente y sin poder evitarlo, muchos empleados, buscando comodidad, son arrastrados a efectuar malos procedimientos en procura de

una mejor situación personal y es cuando por lo exiguo del sueldo cometen actos censurables.

«Volviendo a las vías de comunicación, le diré, que en este territorio carecen de telégrafo todas las poblaciones de la zona cordillera Sur. Le citaré entre ellas Trevelín, Río Pico, Alto Río Senguer y Alto Río Mayo; en la faja central, Ensanche Sarmiento, Paso de Indios, Gastre, San Gan y Telsen.»

Y agrega: «Los 146 pesos líquidos que gana un agente, puedo asegurarle que, por lo menos en este territorio —en el Chubut— no le alcanzan para vivir, menos todavía en zonas alejadas donde todo es carísimo y tiene que mantener de su peculio el caballo que usa en comisiones del servicio, lo que cuesta aproximadamente 40 pesos mensuales. Fuera de la carestía está la escasez de artículos de primera necesidad. En muchas zonas, también, la falta de leña en estos climas glaciales en el invierno. A pesar de todo, espartanamente se lucha, pero esa vida es impropia, incua, ya no condice con la época actual.

«Como decía anteriormente, existe una pobreza absoluta; los funcionarios, para poder actuar, casi siempre deben requerir la ayuda de los pobladores, molestándolos por automóviles, caballos, etcétera, y así quedan obligados a esa gente; y supóngase, como ya ocurrido muchas veces, cuando tienen que procesar a esas personas, lo hacen mal, sin deseos, por supuesto, de afectarlas.»

Es un cuadro real, es un cuadro que tiene la importancia de lo vivido. Para que se aprecie que yo no quiero ocultar un solo aspecto de la realidad de la vida de los territorios, sino por el contrario, dar a la Cámara la sensación de esa realidad, para encontrar, dentro de lo discreto y atinado, la solución que esa realidad exige, voy a referir un hecho relatado por un viejo poblador hace pocos días en forma que me merece absoluta fe y que prueba que hay malos, pésimos funcionarios que necesitan ser vigilados y en muchos casos radiados de la administración y que pueden serlo allí donde hay gobernadores celosos de la misión que se les ha confiado, no de esos gobernadores viajeros que uno los ve con frecuencia en esta Cámara o que están en todas partes menos en sus puestos, y que atienden más las necesidades políticas de algunas provincias limítrofes que las de la propia población que gobiernan, originando con frecuencia reclamaciones de las poblaciones.

Este viejo poblador a que me refiero, a su paso por Mata Magallanes, en Chubut, asistió

a una casa de familia que celebraba un acontecimiento íntimo. Se sentó a la mesa porque fué invitado a ello y se le ocurrió preguntar a la dueña de casa qué era lo que se festejaba. La señora le contestó: «Hace un mes mi hija y aquel joven que se sienta a la cabecera de la mesa desean casarse. No han podido hacerlo hasta ahora porque les falta el certificado médico correspondiente. Por fin lo obtuvieron en Colonia Las Heras y hoy precisamente fueron a Ensanche Sarmiento, Chubut, para contraer el matrimonio, pero se encontraron con un juez que les dijo: Sí, yo los voy a casar, pero no puedo hacerlo por menos de 200 pesos.»

Como los contrayentes no tenían recursos, no pudieron cumplir su propósito.

Preguntado por este viejo poblador amigo mío, de toda mi confianza, qué pensaba hacer, el novio respondió: «Iré a Lago Blanco porque conozco al juez y creo que no me cobrará tanto. Si no consigo realizar allí mi matrimonio, tendré que casarme en Chile, porque allí no cobran nada.»

Afirmo la absoluta veracidad de este relato, y quiero que los señores diputados y el ministro del Interior aprecien toda la gravedad que encierra este episodio, que por desgracia no es único en los territorios.

Sr. Alperín. — ¿Cuándo ocurrió eso?

Sr. Solari (J. A.). — En el año 1938.

Sr. Alperín. — Lo sensible es que no haya llevado la denuncia ante el ministerio correspondiente, que con toda seguridad habría dispuesto la investigación y procesamiento de ese mal funcionario.

Sr. Solari (J. A.). — Yo no me olvido que soy diputado nacional y que desde mi banca puedo decir estas cosas.

Sr. Alperín. — Porque es sensible que contra sus deseos no puedan celebrar dos argentinos su matrimonio en el país.

Sr. Susan. — La referencia es exacta. Yo también la conozco. En lo que no coincido con el señor diputado por la Capital, es en el monto que se pedía.

Sr. Solari (J. A.). — Repito el hecho como me lo relataron.

Señor presidente: se dice que es sobre todo en las regiones fronterizas donde se nota la falta de una vigilancia severa y eficaz, lo que permite la frecuencia e impunidad de atentados de todo orden. Se agrega que la impresión que se recibe al entrar a nuestro territorio es penosa por el aspecto de los gendarmes actuales y ciertos detalles reveladores del abandono, por parte de las autoridades argentinas, de cuanto

podría traducir un vigoroso sentimiento nacional.

En este aspecto de la cuestión cabe reconocer que hemos dado un paso importante con la creación de la VI división del ejército, cuyo arribo ha sido saludado jubilosamente por las poblaciones. Era hora de volver por ese camino desgraciadamente abandonado en 1907, cuando se retiraron los regimientos que desde 1898 existían en Trelew y Gallegos. En treinta años cuánto se habría podido realizar en la obra que nuestro ejército pudo y debió cumplir en esas lejanas regiones del país, obra de paz, obra de trabajos, de estudios, de civilización. El ideal sería que esa división llegara a tener su asiento, no en Bahía Blanca, sino en una ciudad que tal vez surja en el porvenir en el seno mismo de los territorios. Recuerdo el juicio de un militar argentino, a quien he citado alguna otra vez en la Cámara, cuyos prestigios técnicos son indiscutidos, quien en una conferencia, al referirse a la disposición que tienen en nuestro país las fuerzas del ejército, al criterio seguido en esa materia, expresaba lo siguiente: «Lo lógico es, cuando se han de establecer los centinelas de una fortaleza, comenzar por situarlos en los fuertes externos de la misma antes que en la parte interna. En el territorio patrio, que debemos defender, las puertas externas son sus dilatadas regiones de frontera, siendo en ellas donde correspondía llevar de preferencia desde el lejano comienzo como centinelas avanzados de seguridad las guarniciones militares.»

Y debo agregar, que la presencia de la infantería de marina, de la policía marítima y de la aduanera contribuyen ya sin duda en el Sur de nuestro país a hacer efectiva la presencia misma de la Nación, creando ante propios y extraños un espíritu de seguridad y de confianza, de garantía y de tranquilidad. Necesitamos llevar a esas extensas y apartadas regiones ese espíritu, afianzarlo en cumplimiento de deberes propios de todo ejército, sin que ello pueda en ningún momento considerarse una función extraña o recelosa. Pero, claro está, señor presidente, sin abandonar una permanente y orgánica acción de gobierno que haga posible el arraigo de poblaciones rurales laboriosas, acción que debe ser paralela, si no anterior, al establecimiento de guarniciones militares.

He rendido alguna vez desde esta banca mi homenaje al esfuerzo de las tropas que hace 70 años luchaban en tierras cordobesas contra los indios, contribuyendo a levantar sobre la base de los aduares ranquelinos, florecientes ciuda-

des del Sur de esa provincia, como Laboulaye y Río Cuarto. Cómo olvidar la gran misión cumplida por el viejo y meritorio ejército que hace poco más de medio siglo conquistó el desierto y trazó en su trayecto glorioso, en base de sus pobres fortines, con heroísmo, haciendo frente a dificultades que hoy no conocemos y que tal vez no nos imaginamos, las grandes y prósperas ciudades actuales, como Azul, como Tandil y como Bahía Blanca! Volvamos a esa ruta con igual patriotismo y la misma amplia visión de patria que guió al viejo ejército.

Con esta expresión de sentimientos, cuya sinceridad ningún señor diputado puede poner en duda, yo digo la opinión que me merece la fuerza armada del país para dejar así definitivamente eliminado todo posible equívoco a propósito de la interrupción del señor diputado por Entre Ríos.

La armada nacional —lo sé porque alguna vez lo he visto— es recibida siempre con júbilo en el Sur. Su presencia indica a esas poblaciones, no la visita de turistas, sino la presencia de una institución que ha sabido, a través de los años, realizar por las costas una obra meritoria de progreso.

No tengo dudas con respecto a la organización moderna de nuestro ejército. Sé que se han aumentado sus efectivos y la Cámara ha votado las disposiciones pertinentes. Sé que es posible extender su acción a los más lejanos límites del país. Quiero ahora considerar una omisión importante de este despacho que tratamos; la que se refiere al reclutamiento de personal oficiales para gendarmería. No hay suficientes elementos de juicio. ¿Será todo de escuela? ¿Será mixto? ¿Será personal retirado, con sueldos de militares en actividad, más el sueldo que perciben en el retiro? ¿Se establecerán escuelas de formación de oficiales para misiones tan simples? En este caso sería costosísimo, a mi juicio, sobre todo si se las compara con las distintas escuelas que el ejército tiene.

No creo, señor presidente, que la gendarmería sea la solución de este problema. No lo creo por los defectos que he tratado de señalar, tal vez un poco desorganizadamente, en esta exposición, y porque tengo presente alguna experiencia en los territorios, especialmente en el Sur, a propósito de ciertos cuerpos que ya actuaron con ese nombre. No quiero decir que éste será igual a los otros, pero sé que a pesar del testimonio telegráfico de alguna comuna, de algunas sociedades de fomento, a pesar de alguna opinión que puede ser muy respetable

—que lo es sin duda— grandes sectores, grandes núcleos de la población territorialiana no tienen un recuerdo grato del paso de las gendarmerías de otros años.

La policía fronteriza que actuó allá por 1915 en Santa Cruz y en Chubut hasta 1931, no sirvió para gran cosa y se registraron conflictos y hasta choques con las policías locales. El régimen de gendarmería, que en 1921 y en 1922 actuó también en Santa Cruz, equipado militarmente y con personal numeroso, no anduvo mejor y hubo que disolverlo a pedido de los hacendados de esos territorios.

Existe otro regimiento de gendarmería creado por iniciativa, me parece, del ex presidente Irigoyen en 1917, y que tiene por misión la vigilancia y policía de la zona militar de la gobernación de Formosa. Está en actividad. Consta de tres escuadrones, uno con 100 soldados conscriptos y los dos restantes con un total de 200 soldados voluntarios. Los informes que poseo sobre su actuación son contradictorios, señor presidente, y debo decir a la Cámara que no hace mucho fueron denunciados públicamente hechos graves y que se afirmó en publicaciones responsables que los pobladores solicitaban el retiro de ese regimiento. Sé que se ha levantado una investigación, pero desconozco las conclusiones de ella y estoy inhibido, en consecuencia, de abrir un juicio definitivo sobre el alcance, la seriedad y la gravedad de esas denuncias; pero el hecho ha existido.

Sería interesante saber si para este proyecto se ha consultado la opinión de los jefes que han pasado por ese regimiento. Es una opinión autorizada de hombres que han tenido ocasión durante más de veinte años de acumular una experiencia digna de ser tomada en cuenta. El Poder Ejecutivo sostiene que para remediar los males que apunta en el mensaje, necesita una organización con un total de 3.688 hombres, de los cuales 3.000 serían gendarmes. No ha encontrado otra solución y considera que con ella, con la gendarmería, resolverá los más importantes problemas de los territorios.

No van tan lejos militares estudiosos y que conocen muy bien la Patagonia. El coronel Sarobe, que tiene un interesante libro sobre *La Patagonia y sus problemas*, publicado en 1935, se refiere al proyecto de gendarmería del Poder Ejecutivo, de 1926, que establecía como personal de tropa 2.000 gendarmes y 600 ayudantes, etcétera. El coronel Sarobe es partidario de la gendarmería, pero no estimaba indispensable crear y movilizar una fuerza —que entonces era de 2.000 gendarmes y ahora se eleva a 3.000

— para resolver los problemas que plantean los territorios. El expresa su opinión en la página 340 de su libro, con estas palabras: «Como las actuales condiciones financieras imponen una limitación estricta en los gastos, en vez de tres regimientos de gendarmería, cuya creación se aconsejaba en aquel proyecto, se debería crear, en nuestra opinión, por el momento, solamente uno de 700 plazas, dividido en seis escuadrones, siendo la organización y composición de esas unidades semejante al establecido en el proyecto de ley antes mencionado. Los escuadrones se destinarían a guarecer la zona fronteriza de los territorios de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, con una subunidad en Tierra del Fuego, distribuyendo los núcleos y destacamentos salidos de esos escuadrones, de acuerdo con las necesidades locales y la densidad de la población en cada zona, dejando, por lo menos, un medio escuadrón para la seguridad directa de Comodoro Rivadavia, por la indudable importancia económica, industrial y social que tiene».

Yo pregunto si las condiciones económicas y financieras del país han mejorado al punto de permitir un gasto que puede apreciarse en pesos 20.000.000. ¿Por qué, en último caso, no se opta por el sistema sostenido por el coronel Sarobe, si realmente la gendarmería ha de ser, como se pretende, sobre todo en algunas opiniones periodísticas, la panacea para todos los males y problemas desde la falta de policía hasta la radicación de poblaciones?

Dudo mucho —y por eso expreso con alguna extensión mi pensamiento— de la eficacia de la ley que discutimos, no sólo por su caprichosa contextura y la base contradictoria que se le ha dado, sino por algunas reflexiones que voy a formular respecto a la misión y organización de la gendarmería.

En primer término, se coloca a la gendarmería frente a los gobernadores de los territorios, en cuanto a las funciones que ellos tienen asignadas por la ley. La ley número 1.532, de territorios nacionales, en su artículo 7º, dice: «El gobernador tendrá los deberes y atribuciones siguientes: Es la autoridad local superior encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales;» y el artículo 2º del proyecto de ley en discusión, dispone que la gendarmería nacional tendrá la misión de asegurar el cumplimiento de las leyes de la Nación y demás disposiciones legales.

No es aventurado pensar en conflictos. No los deseo ni los auguro, pero no es aventurado

sospechar conflictos, sobre todo si se tiene presente la dependencia y jurisdicción de la gendarmería, oscilando como un péndulo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Guerra. Por momentos uno se figura, —y esto lo digo con todo el respeto que me merecen los autores de la iniciativa— que ha sido elaborada sin mucho conocimiento del terreno y de las mismas necesidades que se quiere atender. ¿Se desea una gendarmería ágil, rápida, o un cuerpo pesado? ¿Se quiere una fuerza eficaz o un organismo sedentario? ¿Retirados felices a la espera de tener que intervenir frente a algún hecho delictuoso, o gendarmes, policía efectiva, ágil y rápida? Yo creo que teniendo en cuenta las grandes extensiones en que debe actuar la gendarmería, debió pensarse en una organización de movimientos fáciles. Y bien; se organiza una gendarmería pesada sobre la base de 4.300 caballos y mulas como elementos de movilización de 3.600 hombres. Considero que en esto se ha olvidado la experiencia que tiene acumulada nuestro propio gobierno porque debe saberse que hubo necesidad de motorizar el regimiento 10 de infantería que ahora está en Covunco Centro. Es un error proyectar fuerzas montadas para regiones de esta naturaleza hasta por el costo del forraje, por el elevado flete en tren y camiones; y por otra parte, es sabido que el clima no es el más apropiado para el ganado caballar.

Sr. Susan. — Pero por la cordillera no andarán con motocicleta o en camiones.

Sr. Solari (J. A.). — Yo no pido que vayan todos en motocicletas; unos pueden ir a pie y otros a caballo o mula.

Si se me pidiera mi opinión, que desde luego no es técnica pero que la he formado conversando con gente que en esta materia sabe más que yo, que tiene alguna experiencia y conoce los territorios, yo diría esto: en el Sur se puede hacer una distribución de modo que tres cuartas partes estén motorizadas y una cuarta parte sea fuerza montada. En el Norte puede hacerse por mitades esa distribución porque en determinadas épocas del año hay necesidad de utilizar caballos o mulas.

Se hace, repito, una gendarmería pesada y por muchas disposiciones del dictamen que discutimos, por el espíritu de esta futura ley, una gendarmería sedentaria. Da la impresión de que se va a ubicar allí gente en forma lo más tranquila posible a la espera de acontecimientos que puedan inquietarla, pero sin los elementos ni la organización estructural que permita pensar en una fuerza realmente ágil, móvil, rápida como debe ser ésta.

¿Qué se piensa respecto a la utilización de aviones, de instalaciones radiotelegráficas y, en general, de los elementos técnicos modernos incorporados ya a otros servicios? La Capital Federal tiende a motorizar su policía; algunas provincias, como la de Buenos Aires, van en grande y constante proporción a ello e incluso tienen aviones con elementos modernos de toda naturaleza.

Respecto al criterio seguido para determinar la extensión de tierra fiscal que se pondrá a disposición, según el artículo 46, no parece tampoco haberse tenido en cuenta la realidad de los territorios. Por eso he dicho que da la impresión de una cosa un tanto improvisada. En La Pampa, por ejemplo, se le asigna dos fracciones de tierra fiscal de 10.000 hectáreas cada una, y yo puedo decir que la tierra fiscal disponible en Santa Isabel, o en Copelina, El Noche, etcétera, no es apta; es una zona sin riego, despoblada. El artículo 47 del despacho dice, precisamente, que debe tratarse de tierra apta para establecer colonias de hogar.

En el caso de Chubut y de Santa Cruz, si se trata de tierras fiscales sobre los ricos valles cordilleranos, la extensión de que habla el proyecto es excesiva; si se trata de tierras sobre la costa, es insuficiente porque allí una legua de tierra solamente admite 500 ó 700 ovejas, según mis referencias.

En cuanto al Chaco y a Misiones, es evidente que la extensión de que habla el proyecto, es también excesiva.

Otros detalles podrían señalarse. Se proyecta nombrar un médico inspector y 14 médicos de escuadrón y 21 enfermeros; en cambio hay 8 veterinarios y un enfermero, número que dependerá de donde estén radicados los núcleos. No figuran herradores en la distribución minuciosa de los gastos que la aplicación de la ley demandará.

Hay cálculos insuficientes: se hace llegar a \$ 11.185.000 los gastos; en la práctica pasarán de 15.000.000. No figuran sueldos de cocineros, de personal auxiliar, de herradores ni gastos para el mantenimiento, aparte de lo que costará el armamento, el vestuario y el equipo, que insumirán seguramente 5.000.000 de pesos.

Suma, entonces, unos 20.000.000 de pesos; es decir, la quinta parte del presupuesto de guerra de la Nación.

Hay cálculos optimistas. Para fletes y transportes, \$ 50.000, lo que es poco. Calculando que 4.300 caballos y mulas consumen al año 12.000 toneladas de pasto a razón de \$ 10 la tonelada, ya serían \$ 120.000 por ese concepto.

Sr. Saccone. — ¿Diez pesos la tonelada? Vale \$ 50, señor diputado.

Sr. Solari (J. A.). — Me estoy refiriendo al flete, señor diputado.

Sr. Videla Dorna. — No en todas partes se necesita forraje.

Sr. Solari (J. A.). — ¿Hay caballos que no comen?

Sr. Videla Dorna. — Hay partes donde el forraje es natural y no habrá que pagarlo.

Sr. Solari (J. A.). — Deben ser escasísimas esas regiones.

Sr. Videla Dorna. — Sí, las hay.

Sr. Saccone. — En el Sur, durante el invierno, que son ocho meses al año, no hay pasto.

Sr. Solari (J. A.). — Sé que se me dirá que muchos aspectos que he tocado en mi exposición serán motivo de la reglamentación. Presumo, adivino el argumento. Pero creo que algunas cuestiones no pueden ser motivo de reglamentación, no ya con respecto a la finalidad de la ley, sino a la distribución de los gastos, a la orientación de esta creación que se pretende que la Cámara vote.

Necesitamos escuchar la opinión del señor ministro de Hacienda. ¿El estado de las finanzas públicas permite este enorme gasto? Tengo oído que cuando, no hace muchos días, se habló de algunos millones de pesos para llevar adelante un plan sanitario y de defensa de los niños argentinos en el interior, se hizo notar que el estado de las finanzas, para las que se prevé un déficit bastante abultado, no era tal que permitiera pensar en tomar de rentas generales una cantidad que desde luego era inferior a la que ahora va a exigir el cumplimiento de esta ley. No sé si en la comisión habrá expresado su opinión el señor ministro de Hacienda. Tampoco sé si se ha tenido en cuenta, para organizar esta gendarmería con tan vastos alcances, la opinión que se va generalizando y ganando camino en algunos territorios como La Pampa, Chaco y Misiones, en el sentido de la provincialización.

Señor presidente: Entiendo que no se ha demostrado la urgente necesidad de la gendarmería, que se proclama; que ésta no surge como la mejor solución propuesta; que no aparece como la organización más indicada la que se propone; que no da la impresión de que se haya realizado un estudio serio y que se trata de un gasto excesivo que no se sabe hasta dónde podrán soportar las finanzas.

¿Por qué no se ha pensado directamente en una nueva organización policial? Hay estudios serios y viables que consultan las necesidades

actuales y que podrían servir de punto de partida. No voy a entrar, a estas horas, al análisis de trabajos que he tenido ocasión de conocer. Un hombre estudioso de la Policía de la Capital, el señor Lucas Jordán Rebecchi, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, en la «Revista de Policía y Criminalística de Buenos Aires», de enero-marzo de 1936, esboza un proyecto de organización administrativa de la policía de los territorios federales. Divide los distintos territorios en tres zonas, centralizando la dirección de su policía en una jefatura central que estaría radicada en Buenos Aires, sobre la base, no de una organización militar y de disciplina, que unas veces depende exclusivamente de sanciones administrativas y que otras veces caen en la justicia militar, sino en base de un reglamento que ha permitido a la Policía de la Capital llegar a su estado actual. No voy a someter a la Cámara a la fatiga de analizar este trabajo, pero es evidente que se puede tomar como base racional para una buena reorganización policial de los territorios.

No quiero referirme, en este momento, a un punto de vista que hace algunos años esbozó el señor diputado Repetto con respecto a la organización de una policía federal para la delincuencia, es decir, para fines preventivos estrictamente policiales. A este respecto he leído un artículo de un funcionario policial de alta categoría, el señor Viancarlos, publicado en «La Razón» del 8 de febrero de este año, donde sostiene que las nuevas formas de delincuencia en el país, reclaman la creación de la policía federal. Es un punto de vista digno de ser tenido también en cuenta antes de llegar al extremo de crear un verdadero ejército, como se pretende. Así resultaría una policía menos onerosa, más ajustada a las exigencias fundamentales de nuestras leyes, no se vulnerarían jurisdicciones y se dejaría a cada ministerio en el cumplimiento estricto de lo que son sus funciones típicas.

El señor Viancarlos, en su artículo, hace algunas consideraciones dignas de ser conocidas. Dice: «Si hemos sido capaces de coordinar una acción nacional para la mejor defensa fiscal, como lo atestigua la organización de impuestos internos, ¿no seremos capaces de organizar una acción que defienda la vida misma de los conciudadanos a lo largo de todo el territorio nacional y preserve sus fuentes de riqueza de la codicia de los malhechores?». Agrega después: «La creación y funcionamiento del Registro Nacional de Reincidentes, entre nosotros, dice en forma elocuente que los in-

convenientes que pudieran presentarse, dada nuestra organización institucional, no son insalvables». Señalo simplemente el criterio y la opinión de un funcionario policial que tiene experiencia y puede merecer todo respeto.

Cuando se habla de territorios, hay una palabra que se impone ya clásicamente: argentinizar. Muy bien: argentinizar, pero no gendarmizar. Y argentinizar ¿cómo?

Sostengo que vamos a argentinizar nuestros territorios ricos y feraces, con una población triplicada en escaso lapso, acreciendo y consolidando el prestigio de las autoridades y siempre que la Nación no descuide sus problemas fundamentales. Necesitamos autoridades celosas de sus deberes, que estén en los detalles de su administración, que tomen ese puesto honroso y de responsabilidad, no como una ayuda de costas sino como un patriótico sacrificio al servicio del país. Parece que va pasando ya, felizmente, la época de los alquileres de que alguna vez hablaba Sarmiento y se observa en muchos gobernadores una verdadera dedicación en el desempeño de sus tareas.

Necesitamos comprender y traducir en la ley esta verdad que ya va golpeando la conciencia argentina: Hay casi un millón de hombres en los territorios que tienen todos los deberes pero muy pocos derechos. Se parecen a aquellos que el magnífico Martín Fierro recordó alguna vez: «Entran en todos los entreveros, pero no entran en la lista de pago». Carecen de derechos políticos fundamentales. Son hombres radicados muchos de ellos desde hace muchísimos años, identificados a la vida, la esperanza y al sufrimiento argentinos, que deben pagar impuestos. Pero se trata de las gobernaciones a las que se manda desde la Casa Rosada funcionarios para que las dirijan y que cuando se trata de elegir presidente y vicepresidente de la República, no tienen voto.

El orden municipal ofrece también un cuadro no siempre alentador. En lo que respecta a la efectividad en la letra y en los hechos de los principios esenciales de la ley Sáenz Peña, los ciudadanos de los territorios argentinos están muy distantes de verlas traducidas a la realidad.

Otro problema esencial es el de la tierra pública. Necesitamos radicar poblaciones rurales laboriosas, no artificialmente, con colonias de hogar, que van a vivir con el oxígeno de una ley de gendarmería, sino ofreciendo a los hombres de todo el mundo las mejores posibilidades de bienestar, de seguridad y de liber-

tad en nuestra tierra. Necesitamos, sobre todo, comprender que hay que subdividir esa tierra fiscal, que hay que entregarla a familias que se radiquen y trabajen, asegurándoles una posesión tranquila, dándoles medios, que hay que terminar con los «palos blancos» de que habló hoy con elocuencia el señor diputado por Entre Ríos. No ha de pasar mucho tiempo sin que denuncie desde esta banca algunos hechos ocurridos a propósito del desalojo de pobladores de tierras fiscales en una gobernación del Sur.

Se necesita combatir el latifundio que en cierto modo se oficializa y se fomenta muchas veces, porque yo sé que en la distribución de la tierra pública hay reglamentos, funcionarios, hay hombres que tienen contacto directo con esas cosas; pero yo sé también que a veces no siempre las cosas se ajustan a esos reglamentos y al cumplimiento de los estrictos deberes que tienen tales funcionarios, y que son muy delicados.

Hay que mensurar las tierras; dar publicidad de los padrones respectivos. Hay que poner en conocimiento de las poblaciones y de los hombres arraigados en cada zona cuáles son los lotes fiscales que ellos pueden tener a su alcance y a los que tienen derecho. Hay que evitar intrusos, hay que evitar los traficantes más o menos disimulados de la tierra pública, hay que evitar intermediarios, por alta que sea su posición social y por muy brillante que haya podido ser, pongo por caso, su actuación política, ahora un tanto en decadencia, en cualquier provincia norteña.

Buena justicia, si queremos contribuir a argentinizar los territorios. Yo observo con agrado que algunas iniciativas surgidas de las filas de este sector, propuestas por el ex diputado Buira, han encontrado ya eco en el actual ministro de Justicia.

Necesitamos llevar y hacer efectiva la legislación del trabajo, sobre todo en Misiones y Chaco, y al respecto los señores diputados Repetto y Saccone se han referido recientemente al aspecto de decadencia humana, económica y social de enormes contingentes de trabajadores, que son irremplazables en las tareas que ahora sobrellevan.

Y cuando se ha tratado de llevar la legislación del trabajo y de hacerla cumplir, ¡cuántas dificultades! ¡Las veces que hemos denunciado en esta Cámara violaciones, situaciones realmente pavorosas de miseria y explotación! Y si alguna vez, en algún presupuesto, como ocurrió, creo que en 1934, logramos introducir una pequeña partida para crear una oficina del Departamento del Trabajo en Misio-

nes, se nombraron los empleados, pero la oficina no llegó a funcionar en Misiones.

Si queremos argentinizar de verdad, debemos cuidar la infancia de nuestros territorios, creando los hogares escuelas que hemos propuesto, en esas extensas zonas, porque la pobreza y en cierto modo la falta de hogares propiamente dichos en algunos ambientes, hacen indispensable que el Estado llegue con la escuela y con el hogar a la vez, tomando esos niños que serán mañana los contingentes que van a renovar los que ahora trabajan, bajo su cuidado, para educarlos, para instruirlos, para curarlos y para orientarlos en el sentido de un trabajo regional.

Necesitamos cuidar la salud, y al respecto cito el antecedente concreto de que por iniciativa socialista se resolvió comprar aviones sanitarios —una cosa más modesta que una gendarmería con 3.000 plazas y mucho menos costosa—, pero los aviones sanitarios no han llegado todavía a los territorios del Sur.

Hay obras públicas importantes inconclusas, no obstante reclamarlas insistentemente la población, como la del puerto de Comodoro Rivadavia.

Es urgente establecer comunicaciones fáciles y rápidas, telegráficas y radiotelegráficas, y no tener desconectada buena parte del territorio argentino, de los centros importantes de población, cercanos o lejanos. Hay que establecer esa vinculación que permite el progreso técnico y que nos vinculará a todos los argentinos a través del dilatado territorio nacional.

Necesitamos, sí, argentinizar más, realizando una permanente, una inteligente, una fecunda labor de gobierno seria y metódica y quiero terminar esta exposición recordando unos hermosos artículos publicados en «La Vanguardia», en abril de 1930, por el ex senador Mario Bravo, precisamente con el título de «La argentinización de los territorios no es un problema militar». El doctor Bravo recordaba todo el proceso de nuestro conflicto con Chile en 1902, ponía de relieve la clarividencia, la energía y el patriotismo de los gobernantes que intervinieron, y señalaba como una prenda de seguridad para el futuro de ambos países hermanos el artículo 1º del tratado de arbitraje general: «Ambos países —dice el tratado— se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieren entre ambos países en cuanto no afecten a los preceptos de la Constitución de uno y otro y siempre que no puedan ser solucionadas mediante negociaciones directas». Y después de establecer

esa tradición histórica y recoger la enseñanza de esa obra de gobierno, el doctor Bravo sintetizaba su pensamiento, que es el mío, con estas palabras:

«Digo que el problema de la argentinización de los territorios no es un problema militar ni es un problema de fronteras internacionales en peligro, ni de zonas de territorios amenazados por el desmembramiento. En la Patagonia, como en Los Andes, como en Misiones, la argentinización es un problema de política interna, en cuya solución puede entrar el ejército, sin que el ejército sea su solución».

Señor presidente: Yo he abusado tal vez de la atención de mis estimados colegas, pero he considerado cumplir con un deber, que era irrenunciable, levantando mi voz en representación de intereses y de sentimientos tan legítimos y tan auténticos como los que pueden

interpretar y representar los señores diputados sostenedores del despacho, que yo combato y contra el cual voy a votar.

Los territorios son, en realidad, emporios de trabajo. Yo creo que están destinados a ser los grandes talleres del porvenir argentino. Contribuyamos con nuestra acción de gobierno medular, seria y orgánica, a hacer que ellos se transformen en el hogar feliz y propicio de todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran venir a colaborar con nosotros en la grandeza argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Vilgré La Madrid). — Si no se hace uso de la palabra y no habiendo número en la casa, queda levantada la sesión.